

Notificaciones Juridica UARIV

**De:** Juzgado 10 Penal Circuito Conocimiento - Bogotá - Bogotá D.C. <j10pccbt@cendoj.ramajudicial.gov.co>  
**Enviado el:** Lunes, 6 de abril de 2026 3:00 p. m.  
**Para:** radicacion@comisionidentificacionup.co; Notificaciones Juridica UARIV  
**Asunto:** TRASLADO ACCIÓN DE TUTELA 1ª INST. 11001310901020260007600 (Al contestar cite este número)  
**Datos adjuntos:** 003TutelayAnexos2026-00100.pdf; 009AutoAdmisorio20260007600.pdf

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
Rama Judicial del Poder Público  
Juzgado Décimo (10º) Penal Del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá D.C.  
Carrera 29 No. 18-45 Bloque C Piso 5 Paloquemao Tel 3532666 Ext. 71410  
j10pccbt@cendoj.ramajudicial.gov.co

Bogotá D.C., 6 de abril de 2026

Oficio No. F-0447/T

Señores  
COMISIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE LA UNIÓN PATRIÓTICA  
UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS  
Ciudad

Ref. TRASLADO ACCIÓN DE TUTELA 1ª INST. 11001310901020260007600  
(Al contestar cite este número)

De manera atenta le comunico que a este Despacho le correspondió el conocimiento de la acción de tutela instaurada por MARIELA DEL SOCORRO BARRAGÁN BELTRÁN, identificada con cédula de ciudadanía n. ° 32.621.441, en contra de la COMISIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE LA UNIÓN PATRIÓTICA, en la que solicita el amparo de sus derechos fundamentales de ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y OTROS, dentro de la cual se profirió auto disponiendo su admisión y trámite.

En ese sentido, se le corre traslado de la presente demanda de tutela para que en el **TÉRMINO PERENTORIO E IMPRORROGABLE DE DOS (2) DÍAS HÁBILES** contadas a partir del recibo de la presente comunicación, se pronuncie sobre los hechos y las pretensiones planteadas por el accionante y remitan al expediente las pruebas que pretenda hacer valer.

Por lo anterior, anexo a la presente copia de la demanda de tutela en 56 folio(s) y 0 documentos anexos, corriendo el respectivo traslado para que dentro del término señalado ejerza su derecho de contradicción y defensa, allegando los soportes correspondientes. De no hacerlo, se procederá de conformidad con lo establecido en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991.

**De ser competente otra dependencia para dar respuesta a la presente demanda de tutela, se le requiere para que corra el traslado correspondiente y así lo informe a esta Agencia Judicial.**

Se notifica por este medio, de conformidad a lo señalado en los artículos 30 del decreto 2591 de 1991, 291 del C.G. del P. y 186 del C.P.A.C.A., siendo la dirección electrónica aportada por usted como de notificaciones.

Sin otro particular,

FABRICIO QUIÑONES ÑUSTES  
Secretario

**Juzgado Décimo (10º) Penal Del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá D.C.**

Carrera 29 No. 18-45 Bloque C Piso 5 Paloquemao - Tel. (601) 3532666 Ext. 71410

[j10pccbt@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:j10pccbt@cendoj.ramajudicial.gov.co)



Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia



CO-826789-70



RJ-CER854717-77

**AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:** Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita.

**Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.**

**Acción de tutela 1ª Inst. 11001310901020260007600**

**INFORME SECRETARIAL.** - Bogotá, seis (6) de abril de dos mil veintiséis (2026). En la fecha dejo constancia que se recibió por reparto de la Oficina de Apoyo Judicial, la acción de tutela instaurada por MARIELA DEL SOCORRO BARRAGÁN BELTRÁN, identificada con cédula de ciudadanía n. ° 32.621.441, en contra de la COMISIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE LA UNIÓN PATRIÓTICA, en la que solicita el amparo de sus derechos fundamentales de ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y OTROS, que considera vulnerados por las mencionadas entidades. Sirvase ordenar lo pertinente.-

FABRICIO QUIÑONES ÑUSTES  
Secretario



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
Juzgado Décimo Penal del Circuito con Función de  
Conocimiento de Bogotá D.C.

Bogotá; seis (6) de abril de dos mil veintiséis (2026). -

Visto el informe secretarial que antecede, MARIELA DEL SOCORRO BARRAGÁN BELTRÁN, identificada con cédula de ciudadanía n.º 32.621.441, presenta acción de tutela en contra de la COMISIÓN PARA LA CONSTATAción DE LA IDENTIDAD Y/O PARENTESCO DE LAS VÍCTIMAS LISTADAS EN LOS ANEXOS I, II Y III DEL CASO INTEGRANTES Y MILITANTES DE LA UNIÓN PATRIÓTICA VS. COLOMBIA, en la que solicita el amparo de sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva, debido proceso administrativo, reparación integral, igualdad y dignidad humana.

En el escrito de tutela, la accionante solicitó como medida provisional que se suspenda cualquier actuación que cierre o haga nugatoria la definición de su solicitud y la distribución de la indemnización respecto del expediente Anexo I n.º 314, correspondiente a Bernardo Alfonso Jaramillo Ossa, hasta tanto exista pronunciamiento de fondo; además, que se ordene el trámite preferente de su petición de constatación.

Sustentó esa solicitud en que la accionada negó por extemporánea la petición presentada el 13 de enero de 2026, sin efectuar estudio de fondo sobre su calidad de compañera permanente de la víctima ni valorar

integralmente la documentación aportada. Señaló que esa omisión, sumada al inminente cierre operativo del mecanismo, torna ilusorio su derecho a la reparación integral y puede consolidar un perjuicio irremediable, en tanto existe el riesgo de que concluya el trámite o se distribuya la indemnización sin que previamente se defina su condición de beneficiaria..

En ese orden, de conformidad con lo preceptuado en el inciso 4 del artículo 7 del Decreto 2591 de 1991, las medidas provisionales están encaminadas a proteger un derecho o evitar un daño inminente como consecuencia de los hechos de que trata la tutela.

Al respecto, la Corte Constitucional ha puntualizado que procede el decreto de medidas provisionales frente a las siguientes hipótesis: “(i) cuando éstas resultan necesarias para evitar que la amenaza contra el derecho fundamental se concrete en una vulneración o; (ii) cuando, constatada la ocurrencia de una violación, sea imperioso precaver su agravación”<sup>1</sup>.

La misma Corporación, en el Auto A-207 de 2012 señaló:

*“2. La medida provisional de suspensión de un acto concreto que presuntamente amenaza o vulnera un derecho fundamental, pretende evitar que la amenaza al derecho se convierta en violación o que la violación del derecho produzca un daño más gravoso que haga que el fallo de tutela carezca de eficacia en caso de ser amparable el derecho. Como su nombre lo indica, la medida es provisional mientras se emite el fallo de tutela, lo cual significa que la medida es independiente de la decisión final”.*

Examinado el escrito de tutela y los documentos allegados, el Despacho advierte que, por ahora, no se reúnen los presupuestos necesarios para acceder a la medida provisional solicitada, pues los elementos de convicción aportados no permiten establecer, con el grado de certeza exigible en esta etapa inicial, que la actuación de la accionada comporte un riesgo inminente, grave e impostergable que haga necesaria la intervención urgente del juez constitucional antes de integrar debidamente el contradictorio.

En particular, no se cuenta aún con suficientes elementos para concluir que exista una actuación concreta e inmediata orientada a cerrar definitivamente el trámite de constatación o a distribuir la indemnización correspondiente al expediente Anexo I n.º 314, en términos tales que torne indispensable anticipar una orden cautelar.

En efecto, aunque la accionante afirma que la negativa de estudiar de fondo su solicitud de constatación, fundada en la extemporaneidad, vulnera sus derechos al acceso a la administración de justicia, al debido proceso administrativo, a la reparación integral, a la igualdad y a la dignidad humana, lo cierto es que ese planteamiento requiere ser valorado a partir de la información que rinda la autoridad accionada, especialmente en lo atinente al estado actual del expediente, al alcance de la decisión adoptada frente a la solicitud presentada por la actora, a la existencia de eventuales actuaciones posteriores y a la situación jurídica de las demás personas interesadas en la distribución indemnizatoria. Por ello, no resulta

---

<sup>1</sup> Al respecto, ver entre otros, los autos A-040A de 2001, A-049 de 1995, A-041A de 1995 y A-031 de 1995.



procedente anticipar, por esta vía, una decisión que incide directamente en el núcleo mismo de la controversia planteada en la demanda.

Adicionalmente, si bien la actora sostuvo que la omisión de estudiar de fondo su petición y el eventual cierre operativo de la accionada podrían tornar ilusorio su derecho a la reparación, en este estado preliminar no se encuentra acreditado de manera suficiente que la ausencia temporal de la orden solicitada haga inane una eventual decisión de amparo o produzca un daño irreparable antes de que la entidad accionada ejerza su derecho de defensa y contradicción.

En ese sentido, la medida reclamada no puede decretarse con fundamento exclusivo en la versión expuesta en el escrito tutelar, sin que previamente se cuente con los informes necesarios para esclarecer las circunstancias del caso y verificar el riesgo concreto que se alega.

Así las cosas, el Despacho negará la medida provisional solicitada, sin que ello implique prejuzgamiento sobre la prosperidad de las pretensiones, asunto que se resolverá en la oportunidad procesal correspondiente, una vez obre en el expediente la respuesta de la entidad convocada.

RESUELVE:

**PRIMERO: ADMITIR** la acción de tutela formulada por MARIELA DEL SOCORRO BARRAGÁN BELTRÁN, identificada con cédula de ciudadanía n. ° 32.621.441, en contra de la COMISIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE LA UNIÓN PATRIÓTICA, en la que solicita el amparo de sus derechos fundamentales de ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y OTROS.

**TERCERO: VINCULAR** a la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS.

**SEGUNDO:** En consecuencia, **CÓRRASE TRASLADO** de la presente demanda a la accionada y vinculada, para que, en el **término perentorio e improrrogable de dos (2) días hábiles** contados a partir del recibo de la presente comunicación, se pronuncie sobre los hechos y las pretensiones planteadas por la accionante y alleguen al expediente los documentos que pretendan hacer valer como prueba.

**TERCERO: NEGAR** la medida provisional solicitada por la accionante, en los términos expuestos en la parte motiva de esta providencia.

**CUARTO: TÉNGANSE** como pruebas las que fueron aportadas con el escrito de tutela y las que se alleguen válidamente en el curso de la actuación.

CÚMPLASE,

  
**GUILLERMO ADAME SUÁREZ**  
Juez

Señor

**JUEZ DE CIRCUITO DE BOGOTÁ (REPARTO)**

E.

S.

D.

**ASUNTO:** ACCIÓN DE TUTELA – MEDIDA PROVISIONAL

**ACCIONANTE:** MARIELA DEL SOCORRO BARRAGÁN BELTRÁN

**ACCIONADA:** COMISIÓN PARA LA CONSTATACIÓN DE LA IDENTIDAD Y/O PARENTESCO DE LAS VÍCTIMAS (CASO UNIÓN PATRIÓTICA)

**MARIELA DEL SOCORRO BARRAGÁN BELTRÁN**, mayor de edad, identificada con C.C. 32.621.441, como aparece al pié de mi firma, acudo ante usted en solicitud del amparo constitucional establecido en el artículo 86 de la Constitución Política en contra de la Comisión para la Constatación de la Identidad y/o Parentesco de las Víctimas listadas en los Anexos I, II y III de la Sentencia del caso Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica vs. Colombia (Comisión de Constatación), con el fin de que se ordene: **(i)** estudiar de fondo, de manera inmediata y preferente, mi solicitud de constatación de identidad y parentesco como compañera permanente de la víctima Bernardo Alfonso Jaramillo Ossa; **(ii)** revocar, en lo que a mí concierne, la negativa fundada exclusivamente en la extemporaneidad y decidir motivadamente sobre el mérito de la prueba; y **(iii)** de no ser posible adoptar decisión de fondo, remitir el caso, con todos sus antecedentes, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para que se pronuncie, conforme a la reserva competencial prevista en la Sentencia del caso Unión

Patriótica, teniendo en cuenta los hechos y consideraciones expongo a continuación:

## **HECHOS Y CONSIDERACIONES**

1. La Corte IDH, en Sentencia de 27 de julio de 2022 en el caso Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica vs. Colombia, ordenó crear la Comisión de Constatación para verificar identidad y/o parentesco de víctimas listadas en los Anexos I, II y III y habilitó un trámite específico, con estándar probatorio flexible y reportes trimestrales al Tribunal. Entre otros aspectos, la Sentencia fijó reglas sobre beneficiarios y distribución, asignando el 50% de la indemnización al cónyuge o compañero(a) permanente existente al momento del hecho letal.
2. La Presidencia de la Corte fijó el 18 de septiembre de 2025 como fecha límite para presentar solicitudes, reponiendo el tiempo de suspensión del mecanismo (enero-mayo de 2025). La Corte, en Resolución de Supervisión de 24 de noviembre de 2025, además de prorrogar el funcionamiento, autorizó excepcionalmente tramitar solicitudes extemporáneas recibidas poco después del cierre, dada la complejidad, las causas de tardanza identificadas por la Comisión y su capacidad operativa.
3. Presenté mi solicitud de constatación el 13 de enero de 2026, mientras la Comisión se encontraba en funciones. La Comisión negó su trámite por extemporánea, absteniéndose de realizar examen de fondo sobre mi calidad de compañera permanente y sin valorar la documentación obrante. En pronunciamientos

posteriores **la Comisión afirma carecer de competencia para examinar el mérito por haberse vencido el plazo, pese a continuar en actividades y a la habilitación excepcional de la Corte IDH.**

4. La omisión actual de estudiar de fondo mi solicitud, sumada al inminente cierre operativo, torna ilusorio mi derecho a la reparación y al cumplimiento de la Sentencia internacional, por cuanto impide constatar la calidad de beneficiaria como compañera permanente.
5. En el expediente aparece otra reclamante cuya situación debe ser sometida a revisión integral y contradictoria en sede competente. Esta tutela no pretende una declaración sumaria de fraude ni desplazar el debate probatorio: solicita que se garantice un examen regular y con debido proceso (contradictorio pleno) sobre el reconocimiento aparentemente irregular, evitando que el cierre administrativo petrifique una decisión precaria sin control.

## **DERECHOS VULNERADOS**

De los hechos narrados se configura la vulneración de derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política y en los tratados internacionales de derechos humanos aplicables al caso. De conformidad con el artículo 93 de la Carta, tales instrumentos sirven de parámetro de interpretación y control, en cuanto integran el bloque de constitucionalidad y orientan el alcance de las garantías fundamentales en el orden interno. En consecuencia, la situación aquí planteada debe examinarse no solo desde el texto constitucional, sino

también a partir de los estándares convencionales ratificados por el Estado colombiano. Ello impone a las autoridades el deber de asegurar una protección efectiva, integral y compatible con los compromisos internacionales asumidos por Colombia.

- Acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva.
- Debido proceso administrativo (motivación suficiente, valoración integral, investigación adecuada y oportuna).
- **Reparación integral como víctima y derecho a no ser revictimizada.**
- Igualdad y **dignidad humana.**

### **MEDIDA PROVISIONAL Y CARÁCTER TRANSITORIO**

Desde la presentación de esta acción solicito, como medidas provisionales: **(a)** suspender cualquier actuación que cierre o haga nugatoria la definición de mi solicitud y la distribución de la indemnización respecto del expediente Anexo I n.º 314 (Bernardo Alfonso Jaramillo Ossa), hasta que exista pronunciamiento de fondo; y **(b)** ordenar el trámite preferente. Estas medidas se solicitan con el fin de evitar la consumación de un perjuicio irremediable, en ejercicio de la facultad del juez constitucional para adoptar providencias urgentes dentro del trámite de tutela y para conceder el amparo como mecanismo transitorio cuando la actuación administrativa impone barreras injustificadas de acceso o mantiene sin resolver, de fondo y de manera oportuna, el reconocimiento de medidas de reparación.



## **FUNDAMENTOS DE PROCEDENCIA Y SUBSIDIARIEDAD**

La presente acción de tutela resulta procedente de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, en tanto persigue la protección inmediata de derechos fundamentales amenazados o vulnerados por la actuación omisiva de una autoridad encargada de materializar medidas de reparación en favor de las víctimas. La jurisprudencia constitucional ha reconocido que las víctimas son sujetos de especial protección constitucional y que, por ello, el acceso a la reparación integral debe garantizarse mediante mecanismos reales, oportunos y efectivos, y no a través de respuestas puramente formales o carentes de eficacia material.

Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela es idónea cuando la administración impone barreras de acceso, incurre en dilaciones injustificadas, emite respuestas incongruentes o deja sin resolver de fondo solicitudes relacionadas con medidas de reparación, tal como se desprende, entre otras, de las sentencias SU-254 de 2013, C-253 de 2012, C-588 de 2019, T-068 de 2015, T-333 de 2019 y T-039 de 2023.

En el presente caso, el requisito de subsidiariedad se encuentra satisfecho, debido a que los medios ordinarios de defensa no resultan idóneos ni eficaces para conjurar la amenaza actual que recae sobre los derechos fundamentales invocados. La controversia no se reduce a una discusión administrativa o patrimonial de carácter ordinario, sino que compromete el acceso efectivo a una medida de reparación en un escenario temporalmente restringido, de manera que la espera de otros mecanismos judiciales o administrativos tornaría ilusoria la protección solicitada. Además, la tutela procede como mecanismo

transitorio para evitar la consumación de un perjuicio irremediable, particularmente cuando la omisión estatal puede producir la exclusión definitiva del trámite de constatación y, con ello, frustrar de manera irreversible el reconocimiento y goce del derecho a la reparación integral.

De igual forma, la acción de tutela es el mecanismo constitucional adecuado, no solo porque permite al juez adoptar medidas provisionales desde la presentación de la solicitud para evitar la consolidación de la vulneración, sino **también porque en el presente asunto ya se agotó la vía administrativa disponible sin que ello permitiera restablecer los derechos comprometidos. En efecto, contra la decisión administrativa correspondiente se interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, los cuales fueron resueltos de manera desfavorable mediante la Resolución 2857 del 26 de marzo de 2026. En esas condiciones, resulta claro que los mecanismos ordinarios ya fueron ejercidos y no brindaron una protección material, idónea ni oportuna, de modo que la tutela se torna procedente para evitar que la actuación administrativa cuestionada consolide un daño constitucional de carácter irreversible.**

## **FUNDAMENTOS JURÍDICOS**

### **1. Omisión actual de estudio de fondo y desconocimiento del deber de flexibilización razonable frente a cargas procedimentales**

La vulneración alegada se concreta en la negativa de la Comisión a estudiar de fondo la solicitud presentada, bajo una lectura rígida del

plazo y al margen de la finalidad reparadora del mecanismo creado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tal actuación desconoce que dicho Tribunal dispuso la aplicación de un estándar probatorio flexible y, además, admitió en sede de supervisión la posibilidad de tramitar solicitudes extemporáneas cuando existieran razones objetivas de complejidad o tardanza. En ese escenario, la autoridad accionada no podía erigir el plazo en una barrera absoluta ni clausurar la discusión sin valorar las circunstancias particulares del caso. Proceder de ese modo vacía materialmente el derecho a la reparación y frustra el acceso efectivo a la medida ordenada internacionalmente.

La jurisprudencia constitucional ha sido uniforme en señalar que, tratándose de víctimas, la administración no puede ampararse en formalismos desproporcionados para abstenerse de resolver de fondo solicitudes que comprometen derechos fundamentales. Su deber consiste en motivar de manera suficiente, recaudar los elementos necesarios para esclarecer la situación jurídica sometida a consideración y remover las trabas procedimentales que hagan ilusorio el acceso a la reparación integral. Cuando la autoridad responde de forma evasiva, tardía o insuficiente, vulnera el debido proceso administrativo y el acceso a la justicia. En ese sentido, la línea recogida, entre otras, en las sentencias T-068 de 2015 y T-333 de 2019, rechaza expresamente las respuestas incongruentes y las dilaciones que impiden el reconocimiento oportuno de la indemnización.

En el presente caso, la Comisión conserva competencia funcional para examinar la situación expuesta, pero optó por omitir toda valoración de fondo y convertir el vencimiento del término en una causal



automática de exclusión. Esa determinación desconoce el estándar de flexibilidad exigido por la Corte Interamericana, sustituye la justicia material por un ritualismo incompatible con la protección reforzada de las víctimas y agrava el riesgo de un daño irreversible. Lo que se encontraba constitucionalmente exigido no era el rechazo mecánico de la solicitud, sino la adopción de una decisión motivada, seria y completa sobre la condición de beneficiaria reclamada. La omisión de ese examen constituye, por sí misma, una vulneración actual y autónoma de los derechos fundamentales invocados.

## **2. Procedencia de la tutela como mecanismo idóneo para restablecer el trámite constitucionalmente debido**

La acción de tutela resulta sustancialmente procedente porque la controversia no versa sobre una simple inconformidad administrativa, sino sobre **la frustración actual del acceso a una medida de reparación cuya eficacia depende de una respuesta oportuna y materialmente útil**. El artículo 86 de la Constitución y el Decreto 2591 de 1991 facultan al juez constitucional para impartir órdenes inmediatas, adoptar medidas provisionales y evitar la consumación de perjuicios irremediables, especialmente cuando la inactividad amenaza con tornar ilusorio el derecho reclamado. La tutela, en estos eventos, no desplaza indebidamente a la administración, sino que la obliga a cumplir la función que omitió ejercer.

El presente asunto no se trata, entonces, de una controversia de legalidad ordinaria, sino de una lesión constitucional que exige corrección inmediata. La tutela se impone precisamente para impedir

que una omisión produzca efectos irreparables sobre la situación jurídica de la accionante.

**La necesidad de amparo se torna aún más evidente ante el riesgo cierto de que el trámite concluya o la indemnización sea distribuida sin que previamente se haya definido la condición de víctima.** La negativa por extemporaneidad, sumada a la ausencia de estudio sustancial y a la falta de activación de mecanismos alternativos de protección, convierte la intervención judicial inmediata en una exigencia constitucional, no en una opción discrecional. Bajo esas circunstancias, la protección efectiva de los derechos invocados demanda una orden concreta dirigida a disponer el estudio de fondo, suspender cualquier actuación que torne ilusorio el derecho y preservar la utilidad práctica de una eventual decisión favorable. Todo ello resulta indispensable para evitar que el paso del tiempo opere como mecanismo de negación definitiva de la reparación.

### **3. Necesidad de revisar el reconocimiento aparentemente irregular de otra reclamante, con respeto pleno por el contradictorio**

La presente acción no está orientada a obtener una declaración sumaria de fraude, sino a evidenciar que la autoridad accionada reconoció como beneficiaria a una persona a quien no le asistía esa calidad, sin efectuar una verificación suficiente de los supuestos fácticos y jurídicos relevantes. En contraste, a la accionante se le ha negado el reconocimiento, pese a ostentar la condición de verdadera compañera permanente al momento del fallecimiento y existir, además, elementos objetivos que desvirtúan la legitimidad de la otra

reclamante, entre ellos la liquidación conyugal previamente realizada con dicha persona. **Así, la vulneración no solo deriva del reconocimiento irregular conferido a un tercero, sino también del rechazo injustificado a estudiar de fondo y de manera oportuna el derecho que corresponde a la verdadera titular de la reparación.**

Desde esa perspectiva, lo constitucionalmente exigible es que cualquier reconocimiento previo susceptible de afectar la distribución del componente indemnizatorio sea revisado mediante un procedimiento que asegure contradicción, igualdad de armas, motivación reforzada y **valoración integral del material probatorio.**

La existencia de versiones opuestas sobre la calidad de cónyuge o compañera permanente no habilita a la administración para abstenerse de decidir ni para clausurar el trámite sin depurar adecuadamente los supuestos fácticos relevantes. Por el contrario, **impone el deber de examinar de fondo la controversia y adoptar una determinación fundada en prueba suficiente. Tolerar que una situación aparentemente irregular permanezca incólume por simple inercia institucional equivale a consolidar una denegación material del derecho de la víctima legítima.**

#### **4. Omisión de activar la intervención de la Corte Interamericana y agravamiento de la vulneración**

La sentencia internacional previó expresamente la posibilidad de que la Corte Interamericana interviniera de manera excepcional cuando surgieran dificultades relacionadas con el funcionamiento de la

Comisión o con la valoración probatoria necesaria para las constataciones. En ese sentido, si la Comisión consideraba que no podía resolver de fondo por razón del plazo o por una supuesta falta de competencia, no podía limitarse a rechazar la solicitud y cerrar el trámite, sino que tenía el deber de activar los mecanismos institucionales previstos para evitar que la reparación ordenada internacionalmente se tornara ineficaz.

Adicionalmente, en el presente caso, la Comisión no solo omitió estudiar de fondo la solicitud, sino que tampoco remitió el asunto a la Corte Interamericana, pese a que esa petición fue formulada de manera expresa en el recurso de apelación interpuesto contra la decisión negativa. Aun así, la autoridad resolvió desfavorablemente el recurso y mantuvo su postura, sin promover la intervención del Tribunal Internacional ni adoptar medida alguna orientada a preservar la efectividad del derecho reclamado. Por ello, la intervención del juez constitucional resulta necesaria para impedir que, por omisión institucional, se frustre de manera definitiva el acceso a la reparación.

## **PETICIONES**

- 1.** Amparar mis derechos fundamentales invocados.
- 2.** Ordenar a la Comisión de Constatación:
  - 2.1.** Adelantar de inmediato, preferente y dentro de un término perentorio, el estudio de fondo de mi solicitud de constatación de identidad y parentesco como compañera permanente de Bernardo Alfonso Jaramillo Ossa, valorando integralmente la prueba conforme al estándar flexible fijado por la Corte IDH, y expedir decisión motivada.

- 2.2.** Suspender cualquier actuación que cierre o torne ilusoria la decisión de fondo y abstenerse de distribuir la indemnización correspondiente al expediente Anexo I n.º 314 hasta decidir motivadamente mi solicitud.
- 3.** Garantizar un trámite de revisión con contradictorio pleno respecto del reconocimiento aparentemente irregular a otra reclamante, sin declaraciones sumarias, respetando debido proceso e igualdad de armas.
  - 4.** En subsidio, si la Comisión insiste en no pronunciarse de fondo o declara mantenerse impedida por razones temporales, remitir de inmediato el expediente completo a la Corte IDH para que, en ejercicio de su competencia de supervisión, se pronuncie sobre el fondo de la controversia.
  - 5.** Requerir a la UARIV que, de ser necesario para la efectividad del amparo, preserve la reserva de cupo presupuestal y se abstenga de efectuar distribución definitiva respecto de la víctima Anexo I n.º 314 hasta que exista decisión de fondo.

### **PRUEBAS Y ANEXOS**

- 1.** Copia de la Resolución que negó por extemporaneidad la solicitud (CB-2070, 4 de marzo de 2026) y de la resolución 2857 del 26 de marzo de 2026 que resolvió la reconsideración manteniendo la negativa por plazo, señalando falta de competencia para fondo.
- 2.** Resolución en don de se incluye a MARIELA BARRAGÁN BELTRÁN en el registro único de víctimas RUV, en el hecho victimizante de homicidio.
- 3.** Escritura No. 1654 del 2 de noviembre de 1983 de la Notaria Segunda del Circulo, en la cual se liquida sociedad conyugal.



## JURAMENTO

Bajo la gravedad del juramento, manifiesto que no he presentado otra acción de tutela por los mismos hechos y derechos aquí invocados.

## NOTIFICACIONES

**Accionante:** La suscrita accionante a través del correo electrónico [mariellamax@gmail.com](mailto:mariellamax@gmail.com)

**Comisión de Constatación:** La entidad accionada recibe notificaciones en los siguientes correo electrónicos:  
[secretaria.tecnica@comisionidentificacionup.co](mailto:secretaria.tecnica@comisionidentificacionup.co);  
[ruben.pinilla@comisionidentificacionup.co](mailto:ruben.pinilla@comisionidentificacionup.co);  
[alejandro.valencia@comisionidentificacionup.co](mailto:alejandro.valencia@comisionidentificacionup.co);  
[anateresa.bernal@comisionidentificacionup.co](mailto:anateresa.bernal@comisionidentificacionup.co);  
[secretaria.general@comisionidentificacionup.co](mailto:secretaria.general@comisionidentificacionup.co)

**UARIV:** La entidad accionada recibe notificaciones en el correo [notificaciones.juridicaUARIV@unidadvictimas.gov.co](mailto:notificaciones.juridicaUARIV@unidadvictimas.gov.co)

Atentamente,

  
**MARIELA DEL SOCORRO BARRAGÁN BELTRÁN**  
C.C. 32.621.441



## Comisión para la Constatación de la Identidad y/o Parentesco de las Víctimas de la Unión Patriótica

Resolución N° CB- No - 2070  
Bogotá D.C., 04 MAR 2026

Por medio de la cual se resuelve la solicitud de constatación de la identidad y parentesco de los beneficiarios de la distribución de indemnización de **BERNARDO ALFONSO JARAMILLO OSSA**

EXPEDIENTE: I\_0314\_BERNARDO\_JARAMILLO\_OSSA

RADICADO: 2024-SI-0004648-1

2025-SI-0000508-1

2025-SI-0000775-1

2026-SI-0000026-1

La Comisión para la Constatación de la Identidad y/o Parentesco de las Víctimas Listadas en los Anexos I, II y III del caso Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica vs. Colombia (en adelante, la "Comisión para la Identificación de las Víctimas de la Unión Patriótica" o la "Comisión")

Considerando que la Comisión fue creada por la Sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, "Corte IDH") el 27 de julio de 2022 en el caso Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica vs. Colombia (en adelante, la "Sentencia").

En atención a que la Comisión tiene como mandato realizar la constatación de la identidad y/o parentesco de las personas incluidas en los anexos de dicha Sentencia, a solicitud de las víctimas, sus representantes, sus beneficiarios o los derechohabientes de aquellas víctimas fallecidas, para que puedan acceder a las medidas de reparación ordenadas en ella.

Teniendo en cuenta que la Comisión entró en funcionamiento el 16 de abril de 2024, fecha a partir de la cual las personas incluidas en los anexos deben aportar, hasta el 18 de septiembre de 2025, prueba que acredite su identidad y/o parentesco con las víctimas listadas, y está dentro del término de su mandato.

En cumplimiento del mandato otorgado por la Corte IDH en los párrafos 530 a), b), y c), 533, 534, 535, 537, 538, 539 y 627 literal f) de dicha decisión y de la Sentencia de Interpretación del 24 de enero de 2024 y de la Resolución de Supervisión de Cumplimiento del 24 de abril del 2025, procede a resolver la solicitud de constatación de la identidad y el parentesco presentada por **BERNARDO JARAMILLO ZAPATA, ANA LUCIA ZAPATA HINCAPIE, MARIELA DEL SOCORRO BARRAGAN BELTRAN, CLEMENCIA JARAMILLO OSSA, NYDYA OSSA BOTERO, BERNARDO JARAMILLO RIOS y PAULA TATIANA JARAMILLO ZAPATA** en su calidad de beneficiarios de la distribución de indemnización de **BERNARDO ALFONSO JARAMILLO OSSA**, como víctima directa de ejecución extrajudicial.



### Trámite ante la Comisión

1. La Unidad para las Víctimas corrió traslado de información y documentación a la Comisión de las personas que habían solicitado la medida de indemnización ordenada por la Sentencia ante esa entidad, entre las cuales se encontraba la solicitud elevada por **BERNARDO JARAMILLO ZAPATA** quien solicita la indemnización por el homicidio de su padre, **BERNARDO ALFONSO JARAMILLO OSSA**<sup>1</sup>.
2. Así mismo, **BERNARDO JARAMILLO ZAPATA**, identificado con cédula de ciudadanía 9.871.882, presentó a la Comisión solicitud de constatación de su identidad, en el mismo formulario en el que relacionó a su madre **ANA LUCIA ZAPATA HINCAPIE** y a **CLEMENCIA JARAMILLO OSSA, NYDYA OSSA BOTERO, BERNARDO JARAMILLO RIOS y PAULA TATIANA JARAMILLO ZAPATA**, esto en calidad de beneficiarios de **BERNARDO ALFONSO JARAMILLO OSSA**, víctima de ejecución extrajudicial reconocida e incluida en el anexo I, número 314, de la Sentencia de la Corte IDH<sup>2</sup>.
3. También se presentó ante la Comisión **MARIELA DEL SOCORRO BARRAGAN BELTRAN**, en calidad de beneficiaria de la víctima **BERNARDO ALFONSO JARAMILLO OSSA**.
4. Las peticiones se radicaron y, con base en ellas, se creó el expediente de la referencia.
5. El 4 de julio de 2025 se repartió el expediente al despacho de la Comisionada **ANA TERESA BERNAL MONTAÑEZ** para su trámite, estudio y evaluación<sup>3</sup>.
6. De conformidad con los párrafos 537 de la Sentencia y 126 d) de la Sentencia de Interpretación, la Comisión no le dio traslado de las solicitudes a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas por tratarse de una víctima de ejecución extrajudicial incluida en el Anexo I de la Sentencia, respecto de la cual la Unidad no puede solicitar su exclusión en ningún caso.

### Análisis de la solicitud

7. La víctima **BERNARDO JARAMILLO OSSA**, con número de identificación 10.236.946, aparece incluida en el anexo I, bajo el número 314, de la Sentencia de la Corte IDH en el caso Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica vs. Colombia, como víctima de ejecución extrajudicial.
8. A efectos de acreditar la identidad de la víctima directa se verificó la copia de la cédula de ciudadanía que obra en el expediente<sup>4</sup> con base en la cual se constata que **BERNARDO ALFONSO JARAMILLO OSSA** se identificaba con el cupo numérico 10.236.946, tal y como aparece relacionado en el Anexo I, número 314 de la Sentencia.

<sup>1</sup> 01\_2024-SI-0004648-1.

<sup>2</sup> 09\_2025-SI-0000508-1.

<sup>3</sup> 17\_Acta\_reparto\_ATB.

<sup>4</sup> 03\_CC\_Bernardo\_Jaramillo\_Ossa.





Con base en el registro civil de defunción se puede concluir que el 22 de marzo de 1990 **BERNARDO ALFONSO JARAMILLO OSSA** murió, siendo la causa de su muerte “shock medular – lesión vascular por hemorragia interna costal proyectil”<sup>5</sup>.

Consultado el sistema de información Vivanto de la Unidad para las Víctimas, se constató que **BERNARDO ALFONSO JARAMILLO OSSA** identificado con cédula de ciudadanía 10.236.946, figura incluido en el Registro Único de Víctimas como víctima de homicidio<sup>6</sup>.

En ese orden de ideas, no queda ninguna duda que **BERNARDO ALFONSO JARAMILLO OSSA**, identificado con cédula de ciudadanía 10.236.946, es la víctima incluida en el anexo I número 314 de la Sentencia, como víctima directa de ejecución extrajudicial.

9. A continuación, se constata la identidad de los solicitantes y su parentesco con la víctima directa, en calidad de beneficiarios, de acuerdo con los documentos recibidos por esta Comisión.

10. **ANA LUCIA ZAPATA HINCAPIE** se identifica con cédula de ciudadanía 24.410.531<sup>7</sup>, según el documento de identidad que figura en el expediente, la cual se encuentra vigente conforme al reporte obtenido del aplicativo RNEC de Registraduría Nacional del Estado Civil<sup>8</sup>.

En el expediente existen dos cédulas de ciudadanía que corresponden al número 24.410.531. Una con el nombre de ANA LUCIA ZAPATA DE JARAMILLO, formato antiguo del documento, y otra con el nombre ANA LUCIA ZAPATA HINCAPIE, formato reciente del mismo. El reporte obtenido del aplicativo RNEC de Registraduría Nacional del Estado Civil<sup>9</sup> certifica que el número de cédula 24.410.531 corresponde a ANA LUCIA ZAPATA HINCAPIE.

En relación con la diferencia del segundo apellido, es decir, el cambio DE JARAMILLO por HINCAPIE, debe precisarse que el Decreto 1003 de 1939 obligaba a la mujer casada a llevar el apellido del esposo, disposición que rigió hasta el 27 de julio de 1970, fecha en que entró en vigencia el Decreto 1260 de 1970 por el cual se expidió el Estatuto del Registro del Estado Civil de las personas, que derogó expresamente el Decreto 1003 de 1939. Así, a partir de 1970 el cambio de apellido de la esposa por el del esposo se ha conservado como una costumbre cada vez menos recurrente y permitió que las esposas retomaran su apellido de solteras. De acuerdo con esto, la existencia de las dos cédulas de ciudadanía con número 24.410.531, en las que existe diferencia del último apellido, no afecta la constatación de identidad de la solicitante.

Ahora bien, en relación con el vínculo de la solicitante con la víctima, el certificado del registro civil de matrimonio expedido por la notaría Segunda del Círculo de Manizales<sup>10</sup> el 3 de abril de 1990, certifica que **BERNARDO ALFONSO JARAMILLO** y **ANA LUCIA ZAPATA H.**, contrajeron matrimonio católico el 2 de abril de 1977 en la ciudad de Manizales.

<sup>5</sup> 05\_CD\_Bernardo\_Jaramillo\_Ossa\_RC\_Bernardo\_jaramillo\_Zapata.

<sup>6</sup> 20\_Consulta\_Vivanto

<sup>7</sup> 22\_Cedula\_ALZH.

<sup>8</sup> 24\_Certificado\_estado\_cedula\_24410531.

<sup>9</sup> 24\_Certificado\_estado\_cedula\_24410531.

<sup>10</sup> 23\_Matrimonio\_ALZP\_BAJO.



Obra en el expediente escritura pública 891 del 16 de abril de 1990 expedida por la notaría 19 del Círculo de Bogotá, en la que la señora **ANA LUCIA ZAPATA DE JARAMILLO** identificada con cédula de ciudadanía 24.410.531, realizó la corrección de la partida de defunción 263488 del 23 de marzo de 1990, cambiando el nombre de la conyugue de **MARIELA BARRAGAN** a **ANA LUCIA ZAPATA DE JARAMILLO**<sup>11</sup>. Si bien este documento no tiene ningún tipo de implicación en el presente proceso, sí es una prueba de que la señora **ANA LUCIA ZAPATA HINCAPIE** seguía actuando como esposa del señor **BERNARDO ALFONSO JARAMILLO OSSA** después de su muerte.

En este sentido, teniendo en cuenta que la señora **ANA LUCIA ZAPATA HINCAPIE** contrajo matrimonio con el señor **BERNARDO ALFONSO JARAMILLO OSSA** y que no existen documentos que prueben la disolución de la sociedad conyugal, se reconocerá como esposa de **BERNARDO ALFONSO JARAMILLO OSSA**, identificado con cédula de ciudadanía 10.236.946, incluido en el anexo I número 314 de la Sentencia, a **ANA LUCIA ZAPATA HINCAPIE**, identificada con cédula de ciudadanía 24.410.531

11. **BERNARDO JARAMILLO ZAPATA** se identifica con cédula de ciudadanía 9.871.882, según el documento de identidad que figura en el expediente<sup>12</sup>, la cual se encuentra vigente conforme al reporte obtenido del aplicativo RNEC de Registraduría Nacional del Estado Civil<sup>13</sup>.

En relación con el vínculo del solicitante con la víctima, la copia del registro civil de nacimiento<sup>14</sup> aportado, que reposa en el tomo 17 folio 312 de la Notaría Segunda del Círculo de Manizales, acredita que su padre es **BERNARDO ALFONSO JARAMILLO OSSA**, identificado con cédula de ciudadanía 10.236.946, quien figura como denunciante en el documento y lo suscribe.

En ese orden de ideas, se constata que **BERNARDO JARAMILLO ZAPATA**, identificado con cédula de ciudadanía 9.871.882, es hijo de **BERNARDO ALFONSO JARAMILLO OSSA**, identificado con cédula de ciudadanía 10.236.946, incluido en el anexo I número 314 de la Sentencia.

12. **MARIELA DEL SOCORRO BARRAGAN BELTRAN**, quien se identifica con cédula de ciudadanía 32.621.441<sup>15</sup>, la cual se encuentra vigente conforme al reporte obtenido del aplicativo RNEC de Registraduría Nacional del Estado Civil<sup>16</sup>, presentó documentación para ser reconocida como compañera permanente de **BERNARDO ALFONSO JARAMILLO OSSA** al momento de su muerte.

Es importante precisar que su solicitud de constatación se recibió en la Comisión el día 13 de enero de 2026<sup>17</sup>. Al respecto, el literal f. del párrafo 627 de la Sentencia establece un plazo de 12 meses, desde la notificación de la Sentencia, para presentarse ante la Comisión. Posteriormente, la Corte IDH determinó que el plazo para que las víctimas o sus representantes presentaran las solicitudes de constatación de la identidad y/o parentesco vencía el 18 de septiembre de 2025, según se notificó mediante nota de Secretaría de 30 de mayo de 2025.

<sup>11</sup> 12\_Anexo\_II\_fl\_9

<sup>12</sup> 15\_FORMULARIO\_BERNARDO\_fl6.

<sup>13</sup> 18\_Certificado\_estado\_cedula\_9871882.

<sup>14</sup> 05\_CD\_Bernardo\_Jaramillo\_Ossa\_RC\_Bernardo\_jaramillo\_Zapata, fl. 2.

<sup>15</sup> 19\_Cedula\_MBB.

<sup>16</sup> 21\_Certificado\_estado\_cedula\_32621441

<sup>17</sup> 2026-SI-0000026-1





En este orden de ideas, se niega la solicitud de constatación de identidad presentada por **MARIELA DEL SOCORRO BARRAGAN BELTRAN**, identificada con cédula de ciudadanía 32.621.441, por ser extemporánea.

13. **PAULA TATIANA JARAMILLO ZAPATA**, quien se identificó con cédula de ciudadanía 42.129.231<sup>18</sup>, falleció el 30 de marzo de 2014, según se prueba con el registro de defunción con indicativo serial 07474839<sup>19</sup>.

En relación con el parentesco con la víctima, la copia del registro civil de nacimiento<sup>20</sup> aportado, identificado con indicativo serial 3406886, acredita que **PAULA TATIANA JARAMILLO ZAPATA** nació el 18 de junio de 1978 y su padre fue **BERNARDO ALFONSO JARAMILLO OSSA**, identificado con cédula de ciudadanía 10.236.946.

Atendiendo a que **PAULA TATIANA JARAMILLO ZAPATA** falleció, la parte que le corresponde de la indemnización acrecerá a la de **BERNARDO JARAMILLO ZAPATA**, quien es su hermano e hijo de la víctima, como ya se ha constatado.

14. Dentro del expediente también constan solicitudes de constatación de identidad y parentesco como beneficiarios de **BERNARDO ALFONSO JARAMILLO OSSA**, de **CLEMENCIA JARAMILLO OSSA**, identificada con cédula de ciudadanía 24.321.032, en calidad de hermana; **NYDYA OSSA BOTERO**, identificada con cédula de ciudadanía 24.253.875, en calidad de madre; y **BERNARDO JARAMILLO RIOS** identificado con cédula de ciudadanía 1. 202.030, en calidad de padre.

Según lo dispuesto en el párrafo 627 de la Sentencia, los montos dispuestos a favor de las víctimas de ejecución extrajudicial serán repartidos de la siguiente manera:

*“a) el cincuenta por ciento (50%) de la indemnización correspondiente a cada víctima se repartirá, por partes iguales, entre los hijos de esta, si uno o varios de los hijos hubieren fallecido ya, la parte que le o les corresponda acrecerá a las de los demás hijos de la misma víctima;*

*a) el otro cincuenta por ciento (50%) de la indemnización deberá ser entregado a quien fuera cónyuge, compañero o compañera permanente de la víctima, al inicio de la desaparición o al momento de la muerte de ésta, según corresponda;*

*b) en el evento de que la víctima no tuviese hijos o cónyuge, compañero o compañera permanente, lo que hubiere correspondido a los familiares ubicados en esa categoría acrecerá a la parte que le corresponda a la otra categoría;*

*c) en el caso de que la víctima no tuviere hijos ni cónyuge ni compañero o compañera permanente, la indemnización será entregada a sus padres o, en su defecto, a sus hermanos en partes iguales; (...).”*

De acuerdo con lo anterior, **CLEMENCIA JARAMILLO OSSA** en calidad de hermana, **NYDYA OSSA BOTERO** en calidad de MADRE y **BERNARDO JARAMILLO RIOS** en calidad de padre, no tienen derecho a acceder a la indemnización como beneficiarios de **BERNARDO ALFONSO JARAMILLO OSSA**, toda vez que existen personas que tienen un mejor derecho, según lo dispuesto por la Corte IDH.

15. La presente resolución resuelve exclusivamente las solicitudes de constatación de identidad y/o parentesco relacionadas con el Anexo I, fila 314. De manera que, las solicitudes adicionales presentadas y obrantes en este expediente, serán atendidas en otra resolución de la Comisión.

<sup>18</sup> 13\_Anexo II\_fl\_3

<sup>19</sup> 13\_Anexo II\_fl\_6

<sup>20</sup> 13\_Anexo II\_fl\_4



16. En consecuencia, la Comisión para la Constatación de la Identidad y/o Parentesco de las Víctimas de los Anexos I, II y III de la Sentencia, en ejercicio del mandato conferido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos

#### Resuelve

**Primero:** Constata que la víctima **BERNARDO JARAMILLO OSSA**, con documento de identidad 10.236.946, incluida en el anexo I con el número 314 de la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 27 de julio de 2022 en el caso Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica vs. Colombia, como víctima de ejecución extrajudicial, es y se identificó como **BERNARDO ALFONSO JARAMILLO OSSA** con cédula de ciudadanía 10.236.946.

**Segundo:** Constata que **ANA LUCIA ZAPATA HINCAPIE**, identificada con cédula de ciudadanía 24.410.531, fue esposa de **BERNARDO ALFONSO JARAMILLO OSSA** identificado con cédula de ciudadanía 10.236.946, incluido en el anexo I, número 314, de la Sentencia de la Corte IDH como víctima de ejecución extrajudicial y, en consecuencia, es beneficiaria de la distribución de indemnización otorgada a favor de dicha víctima, sin perjuicio de que puedan reconocerse otros beneficiarios con igual o mejor derecho que se hayan presentado dentro del término fijado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

**Tercero:** Constata que **BERNARDO JARAMILLO ZAPATA** identificado con cédula de ciudadanía 9.871.882, fue hijo de **BERNARDO ALFONSO JARAMILLO OSSA** identificado con cédula de ciudadanía 10.236.946, incluido en el anexo I, número 314, de la Sentencia de la Corte IDH como víctima de ejecución extrajudicial y, en consecuencia, es beneficiaria de la distribución de indemnización otorgada a favor de dicha víctima, sin perjuicio de que puedan reconocerse otros beneficiarios con igual o mejor derecho que se hayan presentado dentro del término fijado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

**Cuarto:** Negar la calidad de beneficiaria de **MARIELA DEL SOCORRO BARRAGAN BELTRAN**, identificada con cédula de ciudadanía 32.621.441, de la víctima **BERNARDO ALFONSO JARAMILLO OSSA** identificado con cédula de ciudadanía 10.236.946, incluido en el anexo I, número 314, de la Sentencia de la Corte IDH como víctima de ejecución extrajudicial, por las razones expuestas en la parte motiva.

**Quinto:** Negar calidad de beneficiarios de **PAULA TATIANA JARAMILLO ZAPATA** identificada con cédula de ciudadanía 42.129.231, **CLEMENCIA JARAMILLO OSSA**, identificada con cédula de ciudadanía 24.321.032, **NYDYA OSSA BOTERO**, identificada con cédula de ciudadanía 24.253.875, **BERNARDO JARAMILLO RIOS** identificado con cédula de ciudadanía 1. 202.030, de la víctima **BERNARDO ALFONSO JARAMILLO OSSA** identificado con cédula de ciudadanía 10.236.946, incluido en el anexo I, número 314, de la Sentencia de la Corte IDH como víctima de ejecución extrajudicial, por las razones expuestas en la parte motiva.

**Sexto:** Por la Secretaría General notifíquese a los interesados la presente decisión.

**Séptimo:** Contra la presente resolución procede la solicitud de reconsideración, la cual deberá ser presentada en un plazo máximo de cinco [5] días hábiles contados a partir de la notificación, prorrogables por el mismo término a solicitud del interesado.



**Octavo:** Una vez se encuentre en firme esta decisión, comunicar esta resolución a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas para que haga efectivas las reparaciones.

**Noveno:** Por la Secretaría Técnica inclúyase esta resolución en el informe trimestral que se presenta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

  
**ANA TERESA BERNAL MONTAÑEZ**  
Comisionada

  
**RUBÉN DARÍO PINILLA COGOLLO**  
Comisionado

  
**ALEJANDRO VALENCIA VILLA**  
Comisionado





## Comisión para la Constatación de la Identidad y/o Parentesco de las Víctimas de la Unión Patriótica

Resolución N° R -  
Bogotá D.C.,

Nº - 2 8 5 7  
26 MAR 2026

Por medio de la cual se resuelve la solicitud de reconsideración

EXPEDIENTE I\_0314\_BERNARDO\_JARAMILLO\_OSSA

Radicado: 2024-SI-0004648-1

2025-SI-0000508-1

2025-SI-0000775-1

2026-SI-0000026-1

La Comisión para la constatación de la Identidad y/o Parentesco de las Víctimas Listadas en los Anexos I, II y III del caso Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica vs. Colombia (en adelante, la "Comisión para la Identificación de las Víctimas de la Unión Patriótica" o la "Comisión").

Considerando que la Comisión fue creada por la Sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, "Corte IDH") el 27 de julio de 2022 (en adelante, la "Sentencia").

En atención a que la Comisión tiene como mandato realizar la constatación de la identidad y/o parentesco de las personas incluidas en los anexos de dicha sentencia, a solicitud de las víctimas, sus representantes, sus beneficiarios o los derechohabientes de aquellas víctimas fallecidas, para que puedan acceder a las medidas de reparación ordenadas en la Sentencia.

En cumplimiento del mandato otorgado por la Corte IDH en los párrafos 530 a), b), y c), 533, 534, 535, 537, 538, 539 y 627 literal f), de la Sentencia de Interpretación del 24 de enero de 2024 y de la Resolución de Supervisión de Cumplimiento del 24 de abril del 2025, procede a resolver la solicitud de reconsideración en contra de la Resolución N°. CB-2070 del 4 de marzo del 2026, promovida por MARIELLA BARRAGAN BELTRAN.

### Trámite ante la Comisión

MARIELLA BARRAGAN BELTRAN interpuso el recurso de reconsideración en contra de la resolución de identidad y parentesco No. CB- 2070 del 4 de marzo del 2026, dictada dentro del expediente de la referencia, mediante la cual se decidió negar la calidad de beneficiaria de la recurrente por considerar que su solicitud fue extemporánea.

Las razones de disenso se concentran en un juicioso análisis sobre la flexibilización de los términos procesales ante la Corte Interamericana para reclamar y el deber de garantizar el derecho sustancial a las víctimas por sobre las formas.



### Consideraciones

Aunque la Comisión recoge y comparte el análisis efectuado en la solicitud de reconsideración, lo cierto es que, dado el limitado mandato otorgado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no es la llamada, de fondo a modificar los lineamientos de la Corte.

En ese sentido y como se indicó en la resolución CB - 2070 del 4 de marzo del 2026, fue el mismo tribunal internacional el que dispuso un plazo que es perentorio para la Comisión, motivación que por no haber mutado, se reproduce para mantener la decisión:

*Es importante precisar que su solicitud de constatación se recibió en la Comisión el día 13 de enero de 2026. Al respecto, el literal f. del párrafo 627 de la Sentencia establece un plazo de 12 meses, desde la notificación de la Sentencia, para presentarse ante la Comisión. Posteriormente, la Corte IDH determinó que el plazo para que las víctimas o sus representantes presentaran las solicitudes de constatación de la identidad y/o parentesco vencía el 18 de septiembre de 2025, según se notificó mediante nota de Secretaría de 30 de mayo de 2025.*

No significa lo anterior que la solicitante haya culminado sus posibilidades procesales dentro del caso Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica vs. Colombia, sino que la Comisión carece de competencia para pronunciarse sobre el fondo solicitado y la instancia ante la cual podría recurrir sería la misma Corte.

Acorde con lo expuesto la Comisión no accede a la solicitud expresada.

En consecuencia, la Comisión para la Constatación de la Identidad y/o Parentesco de las Víctimas de los Anexos I, II y III de la Sentencia, en ejercicio del mandato conferido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

### Resuelve

**Primero:** No reconsiderar lo dispuesto en la Resolución CB-2070 del 4 de marzo del 2026, de acuerdo con lo considerado en esta decisión.

**Segundo:** Por la Secretaría General notifíquese a los interesados la presente decisión.

  
**ANA TERESA BERNAL MONTAÑEZ**  
Comisionada

  
**RUBÉN DARÍO PINILLA COGOLLO**  
Comisionado

  
**ALEJANDRO VALENCIA VILLA**  
Comisionado





GOBIERNO  
DE COLOMBIA



UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS

**Resolución No. 2018-93977 del 21 DE NOVIEMBRE DE 2018**  
**FUD BE000385443**

**Por la cual se decide sobre la inscripción en el Registro Único de Víctimas, en virtud del artículo 156 de la Ley 1448 de 2011 y el artículo 2.2.2.3.9 del Decreto 1084 de 2015**

**LA DIRECTORA TÉCNICA DE REGISTRO Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN  
DE LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS**

Atendiendo a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011, la Ley 1448 de 2011, el Decreto 1084 de 2015, el Decreto 4802 de 2011, la Resolución No. 00677 de fecha 14 de octubre de 2014 y Acta de Posesión No. 1195 de fecha 20 de octubre de 2014 y

**CONSIDERANDO**

Que la Ley 1448 de 2011 y el Decreto 4802 de 2011 determinaron como función de la Dirección de Registro y Gestión de la Información, *"decidir la solicitud de inscripción en el Registro Único de Víctimas y resolver los recursos de la vía gubernativa de su competencia"*

Que, la señora **MARIELA DEL SOCORRO BARRAGAN BELTRAN** identificada con cedula de ciudadanía No. **32621441**, rindió declaración ante el **PUNTO DE ATENCIÓN TERMINAL DE TRANSPORTES EL SALITRE** de la ciudad de **BOGOTÁ D.C.**, el día **09/11/2018**, para que de acuerdo con los artículos 3 y 156 de la Ley 1448 de 2011, y al procedimiento de registro contenido en el Libro II Título II Capítulo III del Decreto 1084 de 2015, se le inscriba en el Registro Único de Víctimas – RUV. Dicha declaración fue recibida en la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las víctimas el día **09/11/2018**.

En la solicitud de inscripción en el Registro Único de Víctimas se declaró los hechos victimizantes de **AMENAZA, DESPLAZAMIENTO FORZADO, HOMICIDIO**, en la forma y oportunidad legal establecida en los artículos 156 de la Ley 1448 de 2011 y 2.2.2.3.1, 2.2.2.3.2, 2.2.2.3.3, 2.2.2.3.7 del Decreto 1084 de 2015.

De acuerdo con lo anterior, esta Unidad procederá con el análisis de la situación fáctica declarada, en virtud de la evaluación de los elementos jurídicos, de contexto, y técnicos que permitirán fundamentar la decisión.

En ese contexto la valoración se fundamenta en tres presupuestos jurídicos, que son: i) La obligación de interpretar los derechos y deberes consagrados en la Constitución Política, de conformidad con los tratados internacionales ratificados por Colombia<sup>1</sup>, ii) los principios de buena fe, favorabilidad y prevalencia del derecho sustancial, entre otros<sup>2</sup> y iii) el principio de enfoque diferencial<sup>3</sup>.

Por lo que se refiere a los elementos de contexto se consultará información sobre dinámicas, modos de operación y eventos relacionados directamente con el conflicto armado en la zona y tiempo específicos, que permitan evidenciar la situación de orden público al momento de la ocurrencia de los hechos.

En cuanto a los elementos técnicos, se tendrá en cuenta las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la ocurrencia de los hechos objeto de análisis, para lo cual se realizarán consultas en las bases de datos y sistemas que conforman la Red Nacional de Información para la Atención y Reparación de Víctimas, así como en otras fuentes que se estimen pertinentes.

Ahora bien, respeto del elemento jurídico se tiene que, en el marco de la Ley 1448 de 2011 (Artículo 3)

<sup>1</sup> El artículo 93 de la Constitución Política establece: "Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia."

<sup>2</sup> El artículo 158 de la Ley 1448 de 2011 establece que las normas que orientan a los servidores públicos encargados de diligenciar el Registro deben interpretarse y aplicarse a la luz de los principios de favorabilidad, buena fe, prevalencia del derecho sustancial, participación conjunta, confianza legítima, trato digno y habeas data.

<sup>3</sup> El principio de enfoque diferencial, establecido en el artículo 13 de la ley 1448 de 2011, parte del reconocimiento de la existencia de poblaciones con características particulares en razón de su edad, género, orientación sexual y situación de discapacidad, dentro de los cuales se encuentran los jóvenes, niños, niñas, adultos mayores, personas en situación de discapacidad, campesinos, líderes sociales, miembros de organizaciones sindicales, defensores de derechos humanos y víctimas de desplazamiento forzado que en razón a sus condiciones y características particulares requieren especiales garantías y medidas de protección por parte del Estado.





GOBIERNO  
DE COLOMBIA



UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS

**Resolución No. 2018-93977 del 21 DE NOVIEMBRE DE 2018**  
**FUD BE000385443**

**Por la cual se decide sobre la inscripción en el Registro Único de Víctimas, en virtud del artículo 156 de la Ley 1448 de 2011 y el artículo 2.2.2.3.9 del Decreto 1084 de 2015**

**LA DIRECTORA TÉCNICA DE REGISTRO Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN  
DE LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS**

Atendiendo a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011, la Ley 1448 de 2011, el Decreto 1084 de 2015, el Decreto 4802 de 2011, la Resolución No. 00677 de fecha 14 de octubre de 2014 y Acta de Posesión No. 1195 de fecha 20 de octubre de 2014 y

**CONSIDERANDO**

Que la Ley 1448 de 2011 y el Decreto 4802 de 2011 determinaron como función de la Dirección de Registro y Gestión de la Información, *"decidir la solicitud de inscripción en el Registro Único de Víctimas y resolver los recursos de la vía gubernativa de su competencia"*

Que, la señora **MARIELA DEL SOCORRO BARRAGAN BELTRAN** identificada con **cedula de ciudadanía No. 32621441**, rindió declaración ante el **PUNTO DE ATENCIÓN TERMINAL DE TRANSPORTES EL SALITRE** de la ciudad de **BOGOTÁ D.C.**, el día **09/11/2018**, para que de acuerdo con los artículos 3 y 156 de la Ley 1448 de 2011, y al procedimiento de registro contenido en el Libro II Título II Capítulo III del Decreto 1084 de 2015, se le inscriba en el Registro Único de Víctimas – RUV. Dicha declaración fue recibida en la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las víctimas el día **09/11/2018**.

En la solicitud de inscripción en el Registro Único de Víctimas se declaró los hechos victimizantes de **AMENAZA, DESPLAZAMIENTO FORZADO, HOMICIDIO**, en la forma y oportunidad legal establecida en los artículos 156 de la Ley 1448 de 2011 y 2.2.2.3.1, 2.2.2.3.2, 2.2.2.3.3, 2.2.2.3.7 del Decreto 1084 de 2015.

De acuerdo con lo anterior, esta Unidad procederá con el análisis de la situación fáctica declarada, en virtud de la evaluación de los elementos jurídicos, de contexto, y técnicos que permitirán fundamentar la decisión.

En ese contexto la valoración se fundamenta en tres presupuestos jurídicos, que son: i) La obligación de interpretar los derechos y deberes consagrados en la Constitución Política, de conformidad con los tratados internacionales ratificados por Colombia<sup>1</sup>, ii) los principios de buena fe, favorabilidad y prevalencia del derecho sustancial, entre otros<sup>2</sup> y iii) el principio de enfoque diferencial<sup>3</sup>.

Por lo que se refiere a los elementos de contexto se consultará información sobre dinámicas, modos de operación y eventos relacionados directamente con el conflicto armado en la zona y tiempo específicos, que permitan evidenciar la situación de orden público al momento de la ocurrencia de los hechos.

En cuanto a los elementos técnicos, se tendrá en cuenta las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la ocurrencia de los hechos objeto de análisis, para lo cual se realizarán consultas en las bases de datos y sistemas que conforman la Red Nacional de Información para la Atención y Reparación de Víctimas, así como en otras fuentes que se estimen pertinentes.

Ahora bien, respeto del elemento jurídico se tiene que, en el marco de la Ley 1448 de 2011 (Artículo 3)

<sup>1</sup> El artículo 93 de la Constitución Política establece: "Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia."

<sup>2</sup> El artículo 158 de la Ley 1448 de 2011 establece que las normas que orientan a los servidores públicos encargados de diligenciar el Registro deben interpretarse y aplicarse a la luz de los principios de favorabilidad, buena fe, prevalencia del derecho sustancial, participación conjunta, confianza legítima, trato digno y habeas data.

<sup>3</sup> El principio de enfoque diferencial, establecido en el artículo 13 de la ley 1448 de 2011, parte del reconocimiento de la existencia de poblaciones con características particulares en razón de su edad, género, orientación sexual y situación de discapacidad, dentro de los cuales se encuentran los jóvenes, niños, niñas, adultos mayores, personas en situación de discapacidad, campesinos, líderes sociales, miembros de organizaciones sindicales, defensores de derechos humanos y víctimas de desplazamiento forzado que en razón a sus condiciones y características particulares requieren especiales garantías y medidas de protección por parte del Estado.





Hoja número 2 de la Resolución No. 2018-93977 del 21 DE NOVIEMBRE DE 2018: "Por la cual se decide sobre la inscripción en el Registro Único de Víctimas, en virtud del Artículo 156 de la Ley 1448 de 2011 y el artículo 2.2.2.3.9 del Decreto 1084 de 2015".

se consideran víctimas: "(...) a aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno (...)".

Que la señora **MARIELA DEL SOCORRO BARRAGAN BELTRAN** identificada con cédula de ciudadanía No. **32621441**, declaró haber sido víctima del hecho victimizante de **AMENAZA**, junto con su grupo familiar, sucedida el día 01 de septiembre de 1989 en el barrio Los Rosales de la ciudad de Bogotá DC. A su vez, declaró haber sido víctima de un segundo evento victimizante de **AMENAZA**, acontecida el día 02 de febrero de 1989 en el barrio Los Rosales de la ciudad de Bogotá DC. Asimismo, declaró haber sido víctima de **DESPLAZAMIENTO FORZADO**, junto con su grupo familiar, ocurrido el día 18 de marzo de 1989 en el barrio Los Rosales de la ciudad de Bogotá DC, dirigiéndose hacia la ciudad de Berlín (Alemania). Por último, declaró haber sido víctima de **HOMICIDIO** del señor **BERNARDO ALFONSO JARAMILLO OSSA**, quien en vida se identificaba con cédula de ciudadanía No. **10236946**, acaecido el día 22 de marzo de 1990 en el Puente Aéreo de la ciudad de Bogotá D.C., debido al accionar de presuntos grupos armados.

En la narración de los hechos la persona deponente manifiesta que, "(...) Me presento a declarar el Homicidio –de **BERNARDO ALFONSO JARAMILLO OSSA**, quien a la edad de 34 años fuera presidente del partido UP, candidato a la presidencia y senador de la de la República, en representación de la Unión Patriótica. Permanente (entre los años 1988 y 1990) recibíamos amenazas telefónicas o escritas (...) por dichas amenazas nos veíamos obligados a salir de casa (...) tuvimos que permanecer en la ciudad de Berlín Oriental (Alemania), en calidad de exiliados durante 6 meses. A finales del mes de julio del año 1989, regresamos al país y Bernardo retomó su actividad política (...) El día 22 de marzo de 1990, en el Puente Aéreo (...) Bernardo fue víctima de un atentado (...) siendo inmediatamente trasladado a la Clínica (...) donde falleció (...)” (sic)

Para dar respuesta a la presente diligencia se pretende: primero, plantear su énfasis en considerar los patrones asociados al accionar de grupos armados, que permitieron la comisión sistemática y generalizada del hecho victimizante de Homicidio en el marco del conflicto armado. En un segundo momento, se sopesará con la comprensión del marco de surgimiento y la plataforma del movimiento político de la Unión Patriótica y el accionar de los grupos armados que desencadenó en la vulneración de los derechos humanos de los miembros de dicha organización. En el mismo sentido, se hará una breve alusión al magnicidio del candidato presidencial de la Unión Patriótica **BERNARDO JARAMILLO OSSA** teniendo en cuenta elementos asociados a su trayectoria política y su relación con el movimiento político de la Unión Patriótica. A su vez, se planteará una exposición del exilio como una medida para salvaguardar la vida frente a la sistematicidad y generalidad de la acción armada llevada a cabo sobre la colectividad de la Unión Patriótica. Por último, se pretenderá comprender el marco normativo que propende por la ponderación y consideración de las afectaciones y/o vulneraciones ocasionadas por la ejecución de este tipo de infracciones al derecho internacional humanitario en el marco del **HOMICIDIO** del abogado, senador y candidato presidencial de la Unión Patriótica **BERNARDO ALFONSO JARAMILLO OSSA**. Lo anterior, tiene como función considerar la inscripción de la señora **MARIELA DEL SOCORRO BARRAGAN BELTRAN** identificada con cédula de ciudadanía No. **32621441** en el Registro Único de Víctimas (RUV).

Según el Centro Nacional de Memoria Histórica en su informe “¡Basta Ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad”, a partir del uso de fuentes oficiales, ONG’s y entidades dedicadas al análisis del hecho victimizante de homicidio, entre el periodo de 1958 y 2012 aproximadamente 220. 000 personas han perdido la vida en Colombia en el marco del conflicto armado, “Al 31 de marzo del 2013 el Registro Único de Víctimas – RUV – de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas reportó que 166.069 civiles fueron víctimas fatales del conflicto armado desde 1985 hasta esa fecha. Sin embargo, este balance es parcial debido a que el marco legal solo reconoce a las víctimas a partir del 1º de enero de 1985, lo que excluye a 11.238 víctimas documentadas en la base de datos del GMH entre 1958 y 1984. Así mismo, es importante señalar que en el RUV no están incluidos los combatientes muertos en las acciones bélicas. De acuerdo con la investigación del GMH, entre 1958 y 2012, murieron 40.787 combatientes. Es así como al compendiar estas cifras, es posible afirmar que el conflicto armado colombiano ha provocado aproximadamente 220.000 muertos”<sup>4</sup>. Ahora bien, el 81,5% de las personas

<sup>4</sup> CNMH. 2012. “¡Basta Ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad. Bogotá. Págs. 32 – 33.





Hoja número 3 de la Resolución No. 2018-93977 del 21 DE NOVIEMBRE DE 2018: "Por la cual se decide sobre la inscripción en el Registro Único de Víctimas, en virtud del Artículo 156 de la Ley 1448 de 2011 y el artículo 2.2.2.3.9 del Decreto 1084 de 2015".

fallecidas corresponde a civiles protegidos y el 18,5% a combatientes<sup>5</sup>, lo cual permite plantear una gran incidencia de dicha infracción al derecho internacional humanitario sobre la población civil: por cada combatiente muerto ha habido cuatro civiles fallecidos. Es de resaltar que después del desplazamiento forzado, los homicidios aparecen como una práctica común y/o cotidiana entre el repertorio de violencia usada por parte de los distintos actores armados involucrados en el conflicto. La cifra aportada por el CNMH es esclarecedora, aun así, múltiples fundaciones, instituciones, ONG's y/o grupos académicos plantean la existencia de un amplio subregistro frente a las personas fallecidas en el conflicto, a raíz de las distintas estrategias de ocultamiento e impunidad por parte de los grupos armados que han usado los asesinatos selectivos y la desaparición forzada como mecanismo para invisibilizar y/o silenciar múltiples víctimas y/o escenarios de violencia: *"La dificultad para diferenciar a los actores armados se complementa con la imposición del silencio a las víctimas y a los testigos, con el propósito de impedir la denuncia y obstaculizar la investigación judicial. Todo esto ha redundado en el protagonismo de los mismos actores armados, quienes niegan su responsabilidad en los crímenes perpetrados y desvían la atención de la opinión pública"*<sup>6</sup>

Por otro lado, el uso de distintos repertorios de violencia sobre los civiles protegidos, entre estos el homicidio y la desaparición forzada, ha estado asociada al conjunto de estrategias desplegadas por parte de los diversos actores armados para la obtención de recursos estratégicos y la transformación y/o manutención de las lealtades de la sociedad civil que han permitido el control social y el desarrollo de la acción armada en el espacio-tiempo. De tal modo, el conflicto armado en Colombia ha presenciado una escena donde la inmersión de diversos actores, la modificación de las condiciones de desarrollo de la guerra y el auge y/o vigencia de distintas hegemonías territoriales, repercutieron en la vinculación desmedida y/o vulneración de los derechos de la población civil como parte de los objetivos de la acción armada de los grupos en los espacios geográficos: *"La población civil es para los actores armados una fuente de respaldo político, económico, moral y logístico, que suma en el resultado final del conflicto. Para los victimarios, poco importa si ese respaldo es consentido o forzado (...) Según el discurso de los actores armados, la violencia contra la población civil es siempre justificada. Esto se debe a que, para ellos, la población es señalada como una prolongación del enemigo (la llaman, entre otros, "bases sociales", "auxiliadores", "colaboradores", "traidores", "representantes" o "funcionarios") o, incluso porque su victimización hace parte de los costos de la guerra o de los daños colaterales"*<sup>7</sup>.

Teniendo en cuenta lo anterior, los diversos grupos armados en el marco del conflicto han presentado múltiples motivaciones alrededor de la violencia ejercida sobre la población civil. Por un lado, ha sido usual y cotidiano el uso del discurso de la estigmatización, subordinación y/o ataque de comunidades y/o personas específicas consideradas como una extensión o prolongación del enemigo. También, ha surgido la tesis de daño colateral asociado directamente a aquellas acciones donde los límites y medios para el desarrollo de la guerra no existen cuando el objetivo es reducir al adversario a cualquier costo. En el mismo sentido, la violencia como mecanismo de control social y territorial ha fungido un papel preponderante en zonas donde el regimiento y/o autoridad es llevado a cabo por un actor armado; es decir, el grupo armado establece las normas de convivencia y castigo en el espacio geográfico y quienes no se subordinan son objeto de represalia o castigo.

La comisión de los homicidios y/o asesinatos selectivos ha estado asociado, principalmente, a dos factores para los grupos armados en el marco del conflicto armado: uno de tipo territorial y el otro estratégico. Frente al primero, se asocia a la posibilidad de controlar y/o apaciguar a ciertas personas que representan un riesgo y/o amenaza frente al dominio espacial del actor armado. A su vez, tal factor se orienta a aquellos que denuncian y/o condenan frente a la sociedad civil, medios de comunicación e instituciones las acciones perpetradas por los grupos armados. Por otro lado, el homicidio ha sido aplicado como un mecanismo de imposición y/o homogeneización (limpieza social) estratégica de un orden y tipo de ciudadanía aceptable para los fines e intereses de los actores armados<sup>8</sup>. Es de resaltar que tal motivante redundante en la consecución de aliados políticos y territoriales que permitan el desarrollo de las pretensiones del actor armado en el espacio geográfico. En efecto, la comisión de este tipo de infracciones al derecho internacional humanitario se encuentra relacionado con prácticas de posicionamiento y jerarquización de un actor armado sobre una población y/o territorios específicos con el objetivo de neutralizar y/o minimizar las diferencias y/o disidencias.

<sup>5</sup> Ibidem. Pág. 32.

<sup>6</sup> Ibidem. Pág. 33.

<sup>7</sup> Ibidem. Págs. 37 - 38.

<sup>8</sup> Ibidem. Págs. 43 - 54.





Hoja número 4 de la Resolución No. 2018-93977 del 21 DE NOVIEMBRE DE 2018: "Por la cual se decide sobre la inscripción en el Registro Único de Víctimas, en virtud del Artículo 156 de la Ley 1448 de 2011 y el artículo 2.2.2.3.9 del Decreto 1084 de 2015".

Ahora bien, los asesinatos selectivos han sido una modalidad de violencia usada por parte de los grupos armados en el marco del conflicto armado. Dicho tipo de vulneración sobre la población civil tiene como característica dos factores: a) permite el silenciamiento de personas y/o grupos considerados como peligrosos a los intereses del actor armado y; b) asegura un alto nivel de impunidad teniendo en cuenta la ineficiencia institucional para investigar y juzgar dicho tipo de infracciones por parte de los entes encargados: *"Los asesinatos selectivos no solo fueron una estrategia de invisibilización, sino que se integraron a los mecanismos de terror de los actores armados, junto con las huellas de la sevicia y la tortura en los cuerpos expuestos públicamente y con el asesinato de personalidades públicas. Estas prácticas buscaban lograr un efecto de desestabilización política y social"*<sup>9</sup> En cierto sentido, el homicidio fue tomado como mecanismo de guerra para generar la estabilización social y promover un orden social a fin a concepciones políticas e intereses económicos de los grupos armados en los espacios geográficos, a partir del uso del terror y el dominio armado para domesticar y/o acallar aquello considerado peligroso, obscuro y/o ajeno<sup>10</sup>. El CNMH plantea que el uso de tal práctica fue llevado a cabo por, principalmente, los grupos paramilitares y la Fuerza Pública en el marco del conflicto. En distintos lugares donde la hegemonía armada era ejercida por parte de guerrillas, tanto paramilitares como ejército irrumpieron a las poblaciones tildando de auxiliares y/o una extensión de grupos guerrilleros a comunidades. De tal modo, la población civil fue convertida como parte de los objetivos militares por parte de los grupos armados a partir de la estigmatización. La mayoría de las personas sindicadas tenían como castigo la muerte<sup>11</sup>. Lo anterior, no expresa que las guerrillas no llevaran a cabo los asesinatos selectivos, sino que tal práctica fue ejercida en mayor grado por los grupos enunciados previamente.

Por otro lado, la masacre y/o homicidio múltiple (3 o más personas fallecidas en un mismo evento de violencia) ha sido una práctica usual por los grupos armados para resquebrajar tejidos sociales, generar temor y desterrar comunidades enteras. Los grupos paramilitares se caracterizaron por usar la masacre como un medio para ingresar a los territorios con el objetivo de atenuar y romper aquellos espacios geográficos donde la guerrilla había generado procesos de convivencia con poblaciones enteras: *"Fue un ejercicio de terror sistemático que buscaba generar una desocupación duradera. El terror desplegado apuntó a volver inhabitable el espacio físico y social, para producir así el desplazamiento forzado masivo, el abandono y el despojo de tierras"*<sup>12</sup>. Por otro lado, tanto guerrillas como Fuerza Pública la usaron como en escenarios de defensa donde no existía una diferenciación entre combatientes y civiles cuando de atenuar y/o anular al enemigo se trataba<sup>13</sup>. A continuación, se presenta una breve caracterización del movimiento político de la Unión Patriótica (UP) con el objetivo de poder comprender el escenario de victimización sufrido por la colectividad producto del accionar de grupos armados en el marco del conflicto.

La Unión Patriótica surge del proceso de negociación de paz entre la otrora guerrilla de las Farc-Ep y el gobierno del expresidente Belisario Betancur. El apareamiento del movimiento político hizo parte de la apertura y la ampliación de la participación democrática, con el fin de permitir la transición de la vida armada a la civil, en el marco de los acuerdos consensuados y firmados por las partes el día 28 de marzo de 1984 en la Uribe (Meta): *"El movimiento tuvo un tránsito importante en la vida política nacional, gestándose como una tercera fuerza que se encontraba en un proceso de consolidación y que le apostaba a convertirse en una alternativa a los tradicionales partidos Liberal y Conservador"*<sup>14</sup>. La pretensión se sustentó en generar una apertura del sistema político colombiano que permitiese que las reivindicaciones, necesidades y demandas de los sectores distintos al bipartidismo pudieran tramitar las mismas a partir de rutas y/o mecanismos democráticos y no la violencia.

El movimiento de la UP empezó en las regiones constituyendo agendas y mecanismos organizativos que iban acompañados del fervor, el entusiasmo y la esperanza de la izquierda y quienes no hallaban representatividad ni voz en el tradicionalismo político del país. Paralelo a tal proceso, la implementación de lo pactado por las partes generaba atisbos de desconfianza por las partes: por un lado, el cese al fuego bilateral establecido por un año e iniciado el 1 de diciembre de 1984, fue incumplido tanto por la guerrilla como las fuerzas militares; por otro lado, el acuerdo no pactó de forma diáfana la entrega de armas como un escenario puntual y concreto, sino un proceso paulatino sujeto a la voluntad por

<sup>9</sup> Ibidem. Pág. 45.

<sup>10</sup> Ibidem. Pág. 46.

<sup>11</sup> Ibidem. Pág. 48.

<sup>12</sup> Ibidem. Pág. 53.

<sup>13</sup> Ibidem. Págs. 51 – 53.

<sup>14</sup> CNMH. 2018. Todo pasó frente a nuestros ojos El genocidio de la Unión Patriótica 1984-2002. Bogotá. Pág. 21.





Hoja número 5 de la Resolución No. 2018-93977 del 21 DE NOVIEMBRE DE 2018: "Por la cual se decide sobre la inscripción en el Registro Único de Víctimas, en virtud del Artículo 156 de la Ley 1448 de 2011 y el artículo 2.2.2.3.9 del Decreto 1084 de 2015".

parte de las Farc-Ep, que produjo serias dudas en distintos sectores políticos contrarios a la negociación sobre la reincorporación a la vida civil, a raíz del fortalecimiento militar y económico a nivel nacional llevado a cabo por la guerrilla a partir de la VII conferencia; asimismo, la institucionalidad mostraba discrepancias, principalmente, desde el Ministerio de Defensa que continuaba enarblando la solución militar al conflicto. *"De este modo, la relación entre la dejación de armas y la participación política fue en su momento uno de los escollos políticos más grandes del proceso de negociación de cara a la sociedad colombiana, y lo siguió siendo en las negociaciones posteriores entre los distintos gobiernos y las FARC. Este dilema constante alrededor del desarme dejó en una posición muy débil el proceso frente a la opinión pública y de cara a los opositores. Esa resistencia se agravó por el incumplimiento de la tregua por ambas partes, lo que hizo que el debate sobre la dejación de las armas se tornara más polarizante, dada la continuidad de las acciones armadas"*<sup>15</sup>. De tal modo, la UP surgió el día 28 de mayo de 1985 en el marco de un proceso de negociaciones de paz endeble que tenía serios contradictores donde el tradicionalismo político e institucional veía con desconfianza la posibilidad de participación de sectores asociados a la insurgencia, izquierda y movimientos sociales y populares de base.

Teniendo en cuenta lo anterior, quienes le apostaron de manera voluntaria y rotunda a la paz y a la participación política y democrática por la vía civil y no armada *"quedaron en una situación de vulnerabilidad que en últimas devino en tragedia"*<sup>16</sup>. Aun así, la UP enarbó la bandera de la convergencia permitiendo la participación de diversos sectores lo que auguró la apertura a una agenda democrática de la diferencia en el sistema político colombiano *"La UP se forjó como un movimiento amplio, pluralista y de convergencia democrática (...) Como lo recordó Bernardo Jaramillo en una entrevista en 1988 "era necesario aprovechar la apertura política que el presidente prometía"*<sup>17</sup>. Tanto los miembros de las Farc-Ep amnistiados como participantes del Comité Central del Partido Comunista Colombiano (PCC) tomaron la labor del desarrollo y despliegue del movimiento a nivel nacional, principalmente, a partir de las mesas de Diálogo Nacional y la articulación con las organizaciones de trabajos de base en aquellas zonas de influencia: *"En su primer año la UP desplegó una considerable actividad organizativa y para el Primer Congreso, que se realizó el 16 de noviembre de 1985 en Bogotá, su balance señalaba presencia en la mayoría de los departamentos del país y en los entonces Territorios Nacionales. Según cifras establecidas por la propia UP, se realizaron 572 actos en todo el país para su lanzamiento y organización, se constituyeron 2.229 Juntas Patrióticas (órganos de base) en 209 municipios y 13 corregimientos intendenciales, y se movilizaron alrededor de 500 mil personas"*<sup>18</sup>. El llamamiento amplio y fluido de la Unión Patriótica coincidió con un extenso fervor e interés ciudadano por transformar el modo de hacer política y las condiciones sociales y económicas de exclusión y pobreza, junto con la pretensión de la terminación de la relación entre la violencia y política en el país. Debe resaltarse que el accionar de la UP fue diverso y con distintos resultados de impacto y organización debido al contexto y/o condiciones de las zonas; pero sus bases se concentraron, principalmente, en lugares con tradición rural y/o poco integradas a la economía nacional.

Para el año 1987, el paulatino languidecimiento en el cumplimiento de lo pactado en el acuerdo firmado entre la otrora guerrilla de las Farc-Ep y el gobierno de Betancur, el surgimiento de una violencia política orientada hacia miembros de la UP, junto con, la endeble voluntad por parte del ejecutivo en cabeza de Barco<sup>19</sup> y la ruptura del cese al fuego, incidió en el retiro de las Farc-Ep de la Unión Patriótica y la reincorporación de sus miembros a las filas y la acción armada. En el V Pleno de la UP se hizo oficial el deslinde con la otrora organización guerrillera en un contexto nacional polarizado por pugnas entre el tradicionalismo que pretendió menguar y/o truncar la apertura democrática y una alternativa civilista en la política que surgió de un intento fallido de una negociación de paz.

Ahora bien, la UP enarbó como estrategia de acción la participación electoral a partir de, la convergencia y el llamado de quienes habían sido marginados por el sistema político y, alianzas estratégicas con sectores cercanos y a fines a los objetivos promovidos. Todo lo anterior, se asociaba a la intención de facilitar la negociación de una agenda que permitiese el desarrollo de las reformas necesarias en materia social, política y económica del aparato estatal que produjeran un cambio real y efectivo. Dicha estrategia tuvo amplios réditos en los comicios de los años 86 y 88; paradójicamente, tales resultados electorales incidieron en la vorágine violenta que recayó sobre el movimiento de la Unión

<sup>15</sup> Ibidem. Pág. 34.

<sup>16</sup> Ibidem. Pág. 35.

<sup>17</sup> Ibidem. Pág. 39.

<sup>18</sup> Ibidem. Pág. 39.

<sup>19</sup> Presidente de la República de Colombia 1986-1990.





Hoja número 6 de la Resolución No. 2018-93977 del 21 DE NOVIEMBRE DE 2018: "Por la cual se decide sobre la inscripción en el Registro Único de Víctimas, en virtud del Artículo 156 de la Ley 1448 de 2011 y el artículo 2.2.2.3.9 del Decreto 1084 de 2015".

Patriótica: "La reacción violenta contra la UP, que en buena parte se derivó de los logros electorales, fue determinante para que pronto perdiera el terreno ganado en los primeros momentos"<sup>20</sup>. Tal estrategia violenta sobre la Unión Patriótica no permitió afianzar un proceso que inició con una fortaleza y esperanza amplia fundamentalmente en términos locales<sup>21</sup>; por el contrario, incidió poco a poco en la disminución del apoyo y participación electoral hacia la UP producto de las amplias complicaciones, pocas garantías existentes para el ejercicio político y la desconfianza frente a la convergencia y coalición en y con el movimiento: "La violencia homicida contra los representantes de la UP a las corporaciones nacionales fue una de las características más importantes de su victimización, dirigida tanto a las regiones representadas como a la nación en su conjunto (...) En primer lugar, la violencia pre y poselectoral de 1986 y 1988 fue importante para aleccionar a los votantes sobre el voto por la UP. En segundo lugar, las FARC, ante la ruptura de la tregua y su salida oficial de la UP, dejaron de apoyar la logística de los votantes en el ejercicio electoral como en los casos del Caquetá y el Nordeste antioqueño (...). Así mismo, se comprobó la persecución y asesinato sistemático de personas con cargos de elección popular del partido"<sup>22</sup>.

Aun así, la UP representó una innovación política en materia de gobierno y ejercicio de cargos públicos. En general, los lugares donde ejerció poder hubo un gobierno con puertas abiertas y de la mano de la ciudadanía; asimismo, como el movimiento no debía responder a estructuras clientelares, los gobiernos fueron llevados a cabo con independencia. Por otro lado, se pretendió provisionar de servicios públicos e infraestructura básica y social a la mayoría de los lugares. En efecto, la Unión Patriótica constituyó un nuevo modo de gobernar asociado a las necesidades, reivindicaciones y voces de la gente y/o ciudadanía que tuvo un calado efectivo y positivo en las realidades de cada una de las comunidades.

Es de resaltar que la caída de las negociaciones de paz entre el gobierno y las Farc-Ep y, la posterior, ruptura entre la otrora guerrilla y la UP, caló en un proceso de estigmatización de ilegalidad e insurgencia al movimiento por parte de la oposición tradicionalista y la Fuerza Pública. Tal acción incidió en una combinación entre la confusión mediática del ejercicio político de la UP con una supuesta acción armada que condujo al exterminio sistemático<sup>23</sup> y generalizado<sup>24</sup> de los liderazgos y miembros de la colectividad que desencadenaron en el genocidio de la Unión Patriótica: "opositores sociales y políticos adscribieron alianzas criminales a lo largo y ancho del país que terminaron por perpetrar una victimización continuada y a gran escala, desarrollando un proceso de exterminio que terminó por moldear la vida política y el destino de la UP"<sup>25</sup>. El contexto de vulnerabilidad de la organización recayó en una transformación de la agenda de acción de la UP orientada hacia tres pilares, principalmente: la defensa y seguridad de la vida de los miembros del movimiento, el rechazo de la violencia política sufrida y la denuncia de los homicidios y vulneraciones de derechos humanos ejercida sobre el partido. De tal modo, el accionar político de la Unión Patriótica sufrió una paradójica modificación que repercutió en una pérdida profunda de miembros y réditos políticos adquiridos previamente. Todas las acciones se concentraron en la movilización y organización en contra de la victimización sufrida, por un lado y; en segundo lugar, se conformaron distintos comités y/o colectivos en y por la defensa de los derechos humanos y la vida.

La violencia ejercida contra el movimiento político de la Unión Patriótica registra en las bases de datos del Observatorio de Memoria y Conflicto del CNMH y la Corporación Reiniciar, un número de 6.201 víctimas entre los años de 1984 y 2002<sup>26</sup>, donde el homicidio y la desaparición forzada fueron las principales infracciones al derecho internacional humanitario acaecidas por los miembros de la UP. De tal cifra, 4.153 personas fueron víctimas de asesinato selectivo o desaparición forzada; mientras que, el resto 2.049 personas y sobrevivientes sufrieron afectaciones de otro tipo de violencia (desplazamiento o exilio 1.098 víctimas, amenaza 353 víctimas, 249 intento de homicidio, entre otras)<sup>27</sup>. De lo anterior, es posible establecer que hubo una violencia dirigida hacia el exterminio y/o desaparición física, en la cual, el objetivo no era atormentar, sino silenciar de un modo definitivo a quienes participaron de la

<sup>20</sup> CNMH. 2018. Todo pasó frente a nuestros ojos El genocidio de la Unión Patriótica 1984-2002. Bogotá, Pág. 57.

<sup>21</sup> Para 1986 de 1003 municipios, la UP obtuvo participación en 325 consejos municipales

<sup>22</sup> CNMH. 2018. Todo pasó frente a nuestros ojos El genocidio de la Unión Patriótica 1984-2002. Bogotá, Pág. 65.

<sup>23</sup> "La sistematicidad se refiere a la repetición de una conducta guiada por un plan u objetivo" (CNMH. 2018. Todo pasó frente a nuestros ojos El genocidio de la Unión Patriótica 1984-2002. Bogotá, Pág. 420)

<sup>24</sup> "La generalidad implica el carácter masivo de la conducta cuyo indolente desenlace da cuenta de una pluralidad de víctimas" (CNMH. 2018. Todo pasó frente a nuestros ojos El genocidio de la Unión Patriótica 1984-2002. Bogotá, Pág. 420)

<sup>25</sup> CNMH. 2018. Todo pasó frente a nuestros ojos El genocidio de la Unión Patriótica 1984-2002. Bogotá, Pág. 103

<sup>26</sup> Se toma como fecha el año 2002 debido a que el Consejo Nacional Electoral retira la personería jurídica al partido de la Unión Patriótica. Aun así, se han identificado escenarios de victimización posteriores a tal fecha: La Corporación "Reiniciar ha documentado 1.148 víctimas no fatales entre 2003 y 2006, mientras que el Observatorio de Memoria y Conflicto ha registrado 64 asesinatos y desapariciones entre 2003 y 2016" (CNMH. 2018. Pág. 108)

<sup>27</sup> CNMH. 2018. Todo pasó frente a nuestros ojos El genocidio de la Unión Patriótica 1984-2002. Bogotá, Pág. 104.





Hoja número 7 de la Resolución No. 2018-93977 del 21 DE NOVIEMBRE DE 2018: "Por la cual se decide sobre la inscripción en el Registro Único de Víctimas, en virtud del Artículo 156 de la Ley 1448 de 2011 y el artículo 2.2.2.3.9 del Decreto 1084 de 2015".

organización política: *"los militantes asesinados y desaparecidos doblan a las víctimas de la violencia no letal. No se trató de una violencia para hostigar, fue una para exterminar, pues prevaleció el asesinato y la desaparición sobre las amenazas y el desplazamiento forzado"*<sup>28</sup>.

Según el CNMH había una víctima de la Unión Patriótica cada 22 horas entre el mes de mayo de 1984 y diciembre de 2002. Asimismo, había una víctima letal del movimiento cada día y medio en promedio durante el mismo periodo. Los asesinatos selectivos presentaron un aumento considerable entre los periodos de 1987-1998 y 1995-1997. La primera temporalidad responde a la respuesta por parte de opositores y perpetradores frente a los resultados electorales obtenidos por la UP en las elecciones nacionales y locales de los años 1986 y 1988<sup>29</sup>. Frente al segundo periodo existe una relación de las cifras de victimización con el ingreso paramilitar a regiones como el Urabá que dirigieron su acción frente a miembros de la colectividad patriótica<sup>30</sup>. Es de resaltar que la masacre y/o homicidio múltiple se convirtió en una práctica cotidiana en dichos años (1995-97), en comparación a la prevalencia del asesinato selectivo durante el periodo de la existencia del movimiento con personería jurídica, en general<sup>31</sup>.

Los espacios geográficos de la victimización de los miembros de la Unión Patriótica estuvieron concentrados en lugares donde hubo un éxito político - electoral por parte de la colectividad. En ese sentido, la región del Ariari-Guayabero<sup>32</sup>, Magdalena Medio<sup>33</sup> y Urabá<sup>34</sup>, concentraron el 48,8%<sup>35</sup> de las víctimas totales de la UP. De tal modo, la violencia ejercida por los grupos armados hacia los miembros del movimiento tuvo un patrón de localización que permite establecer una estrategia de desaparición y/o ruptura total de aquellos tejidos sociales marcados por la acción upeista<sup>36</sup>. En conclusión, no se calco una estratagema de sometimiento y/o silenciamiento sino de exterminio y/o eliminación total. Otro rasgo espacial distintivo de la violencia política recaída sobre la UP fue la concentración de acciones en zonas urbanas como Medellín y Bogotá que estableció una acción directa y contundente frente a quienes ejercían y/o aspiraban ejercer cargos públicos (por ejemplo, Bernardo Jaramillo Ossa, Manuel Cepeda Vargas, Pedro Luis Valencia, entre otros) y un auspicio y/o ausencia institucional para cometer los ilícitos *"Fue una violencia palpable y muy manifiesta que admite reflexionar sobre la capacidad de red criminal y la certeza sobre la impunidad de sus actos (...) desde el inicio del exterminio de la UP la violencia es perpetrada en los centros del poder político del país: Bogotá y Medellín"*<sup>37</sup>.

En cuanto a la acción armada regional, en el Magdalena Medio hubo una incidencia profunda, creciente y característico durante el periodo de 1984-1988. El pico de victimización estuvo en el año 1988 asociada a imposibilitar el gobierno local de la UP en aquellas zonas donde había triunfado en los comicios. El año 1997 representa otro escenario de escalamiento de las acciones armadas frente a los miembros del colectivo a raíz de la estigmatización y ataque por parte de grupos paramilitares que establecieron como objetivo lograr la conexión de la región del Magdalena Medio con el Urabá, Nordeste antioqueño y noroccidente a partir de la "aniquilación y limpieza total" de los miembros y bases sociales de la UP<sup>38</sup>.

Por otro lado, la región de Ariari- Guayabero presentó una tendencia alta de victimización en el periodo de 1984-1988 similar a la dinámica nacional, que era dirigida hacia aquellos lugares donde los réditos político-electorales obtenidos por la UP generaron una retaliación política: *"La mayoría de las regiones*

<sup>28</sup> CNMH. 2018. Todo pasó frente a nuestros ojos El genocidio de la Unión Patriótica 1984-2002. Bogotá. Pág. 109.

<sup>29</sup> Frente a dicha dinámica de violencia existe la excepción de departamentos como Caquetá y Cundinamarca donde no hubo altos registros de victimización a pesar de los resultados electorales favorables de la UP (CNMH. 2018. Todo pasó frente a nuestros ojos El genocidio de la Unión Patriótica 1984-2002. Bogotá. Pág. 135).

<sup>30</sup> CNMH. 2018. Todo pasó frente a nuestros ojos El genocidio de la Unión Patriótica 1984-2002. Bogotá. Págs. 110-117.

<sup>31</sup> 1984-2002.

<sup>32</sup> Según el CNMH (2018) conformada por "los municipios de El Castillo, Granada, Lejanías, Mesetas, La Uribe, San Juan de Arama, Puerto Rico, Fuente de Oro, El Dorado y Puerto Concora en el departamento del Meta y San José del Guaviare, Calamar, Miraflores y El Retorno en el departamento del Guaviare".

<sup>33</sup> Según el CNMH (2018) conformada por "conformada por los municipios de Aguachica, San Alberto y San Martín en el departamento del Cesar; Barrancabermeja, Puerto Wilches, San Vicente de Chucurí, El Carmen de Chucurí, Santa Helena del Opón, Sabana de Torres, Cimitarra, Rionegro, Puerto Para y Bolívar en el departamento de Santander; Puerto Nare, Puerto Berrio, Puerto Triunfo y Yondó en el departamento de Antioquia; Puerto Salgar y Yacopí en el departamento de Cundinamarca; La Dorada en el departamento de Caldas, Puerto Boyacá en el departamento de Boyacá y San Pablo, Simití, Cantagallo y Santa Rosa del Sur en el departamento de Bolívar".

<sup>34</sup> "la región de Urabá se limita a las subregiones del Eje Bananero, el Sur y Urabá Chocoano con Apartadó, Carepa, Turbo, Chigorodó y Mutatá en el departamento de Antioquia y Ungía y Acandí en el departamento de Chocó" (CNMH. 2018. Pág. 115).

<sup>35</sup> CNMH. 2018. Todo pasó frente a nuestros ojos El genocidio de la Unión Patriótica 1984-2002. Bogotá. Pág. 115.

<sup>36</sup> Dicho planteamiento no pretende invisibilizar la violencia sufrida por miembros de la colectividad en otras regiones y/o zonas del país. En efecto, no se pretende negar la sistematicidad del exterminio y/o ataque en contra de la Unión Patriótica; sino establecer patrones de acción de los grupos armados para comprender los escenarios de victimización sufridos.

<sup>37</sup> CNMH. 2018. Todo pasó frente a nuestros ojos El genocidio de la Unión Patriótica 1984-2002. Bogotá. Págs. 117-118.

<sup>38</sup> Ibidem. Pág. 126.





Hoja número 8 de la Resolución No. 2018-93977 del 21 DE NOVIEMBRE DE 2018: "Por la cual se decide sobre la inscripción en el Registro Único de Víctimas, en virtud del Artículo 156 de la Ley 1448 de 2011 y el artículo 2.2.2.3.9 del Decreto 1084 de 2015".

registraron convergencia y simultaneidad entre los altos niveles de victimización y el éxito político electoral, lo que se refuerza con la constatación de que la violencia tiende a intensificarse en periodos pre y postelectorales<sup>39</sup>. Una particularidad de la violencia sucedida en dicha región se concentra en el periodo de 1988 - 1992 con asesinatos selectivos de quienes ejercían cargos públicos y miembros del colectivo y una violencia en alza a pesar de un pequeño desescalamiento de la victimización a nivel nacional para los mismos años<sup>40</sup>.

Por último, la región del Urabá expresó una tendencia divergente frente a las otras dos regiones, especialmente, porque los indicadores de victimización durante los años 1984 - 1988 fueron bajos en comparación a la tendencia. Por el contrario, la acción armada se concentró entre los años 1995 y 1997, donde la inmersión de grupos paramilitares por parte de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) permeó el accionar político de la colectividad que debió retirarse de la contienda electoral del año 1997 por falta de garantías y como una medida para salvaguardarse<sup>41</sup>.

Por otro lado, los perfiles de las víctimas del movimiento de la Unión Patriótica permiten establecer la composición de éste, como también, el conjunto de personas perseguidas y asediadas por los grupos armados. En su gran mayoría (el 41, 8 %) las víctimas de la UP eran "campesinos, trabajadores administradores de finca o pescadores" y con un 40, 6% "obreros, empleados y funcionarios". Sumado a lo anterior 1 de cada 5 víctimas ejercían algún tipo de rol representativo y/o de liderazgo en las comunidades y en un número significativo se hallaban agremiadas en algún tipo de organización de tipo social y/o comunal: "Atacar a quienes participaban en formas organizativas, una vez más, apuntaba a un daño que trascendía a la víctima, pues su propósito no solo era solo castigar a la víctima por organizarse sino intimidar a los sobrevivientes para desestimar su participación en formas organizativas"<sup>42</sup> Tales cifras permiten comprender la relación de la Unión Patriótica con los movimientos sociales de base, sindicatos, Juntas de Acción Comunal (JAC), entre otros; asimismo, establece una acción sólida y significativa del movimiento en aquellas zonas rurales, periféricas y aisladas del país<sup>43</sup>.

En conclusión, la violencia ejercida frente a los miembros del movimiento de la Unión Patriótica refiere a tres factores, principalmente, a saber: a) el conjunto de retaliaciones pre y poselectorales asociada al éxito de la colectividad en comicios en algunas regiones específicas, "Entre 1986 y 2002, la Unión Patriótica logró por voto popular la elección de 1.229 personas a cargos públicos, 227 de las cuales fueron asesinadas o desaparecidas (...) Esta proporción es mayor si se tiene en cuenta el exilio al que se vieron forzados alcaldes, diputados y congresistas"<sup>44</sup>; b) la ruptura y/o eliminación de tejidos sociales y organizaciones (sindicatos, JAC's, entre otras) permeadas por las ideas upeistas para la constitución de nuevas bases sociales a fines a las tendencias impuestas por actores armados y sectores tradicionalistas y; c) el "exterminio total" del movimiento a nivel nacional en razón de la estigmatización, persecución y/u odio del mismo por parte de sectores políticos y sociales que se aliaron con estructuras criminales para perpetrar una especie de vendetta: "una violencia que no pretende limitar o dificultar su participación sino arrasar con el movimiento político"<sup>45</sup>. En general, la violencia política sufrida incidió en el cierre de la participación democrática del movimiento de la Unión Patriótica y el ejercicio político de los seguidores, miembros y líderes de la colectividad, debido a que un gran número fueron asesinados y desaparecidos y quienes sobrevivieron debieron usar el exilio como una acción de supervivencia. De tal modo, la acción política y su incidencia territorial cesó en los diferentes espacios geográficos a partir de una estrategia de eliminación y terror sistemática y generalizada: "una diversificación en la estrategia de aniquilamiento que apuntaba a desestructurar social y políticamente el movimiento político mediante la aniquilación de sus liderazgos sociales"<sup>46</sup>.

Con relación a los posibles perpetradores de la violencia política sobre el movimiento de la Unión Patriótica se presume una amplia participación de grupos paramilitares y de la Fuerza Pública: "el 94,1 por ciento de la violencia contra la UP ha sido presuntamente perpetrada por grupos paramilitares y agentes de Estado"<sup>47</sup>. Frente a la participación de la Fuerza Pública las investigaciones apuntan a un abuso del principio de distinción entre combatientes y civiles protegidos, a raíz de los procesos de

<sup>39</sup> Ibidem. Pág. 136.

<sup>40</sup> Ibidem. Pág. 128.

<sup>41</sup> Ibidem. Pág. 130.

<sup>42</sup> Ibidem. Pág. 138.

<sup>43</sup> Ibidem. Págs. 137 - 138.

<sup>44</sup> Ibidem. Pág. 139.

<sup>45</sup> Ibidem. Pág. 136.

<sup>46</sup> Ibidem. Pág. 141.

<sup>47</sup> Ibidem. Pág. 147.





Hoja número 9 de la Resolución No. 2018-93977 del 21 DE NOVIEMBRE DE 2018: *"Por la cual se decide sobre la inscripción en el Registro Único de Víctimas, en virtud del Artículo 156 de la Ley 1448 de 2011 y el artículo 2.2.2.3.9 del Decreto 1084 de 2015"*.

estigmatización y desprestigio sufrido por los miembros de la UP, producto, básicamente, del marco de surgimiento del movimiento -Acuerdos de la Uribe (Meta) de 1984<sup>48</sup>. Por otro lado, élites emergentes asociadas al narcotráfico apoyaron el exterminio de la UP para poder desplegar sus intereses territoriales en distintos lugares con existencia y participación de la UP<sup>49</sup>. Los últimos tuvieron una gran relación en la victimización sufrida por la UP a partir de la mediación y promoción de bandas sicariales que perpetraban los siniestros. A su vez, en un porcentaje menor, el 4,1% de las víctimas correspondieron al accionar de grupos guerrilleros.

En dicho sentido, la acción armada en contra del movimiento de la Unión Patriótica configuró un programa de exterminio y/o eliminación planeada, fraguada y auspiciada por distintos sectores (empresariales, gremiales, políticos, entre otros) tradicionales con la participación y ejecución por parte de actores armados que permiten establecer la sistematicidad de la violencia sobre la colectividad: *"la Sala Penal de la CSJ incorporó en la sentencia proferida contra el excongresista César Pérez García por la masacre de Segovia (...) el análisis de la sistematicidad y generalidad de los actos cometidos contra los miembros de la UP (...) afirmó que las amenazas y la masacre perpetrada hicieron parte de un plan previamente concebido, afectaron a un gran número de militantes de este partido en todo el país y fueron ejecutados con el objetivo de eliminar al grupo político UP del escenario político nacional"*<sup>50</sup>. Asimismo, el número cruento de víctimas fatales y/o desaparecidas, junto con, la continuidad de las vulneraciones de los derechos humanos en cabeza de los miembros de la UP en el tiempo y espacio, permiten establecer un accionar generalizado por parte de los grupos armados con el fin de menguar y eliminar a la Unión Patriótica: *"la acción del grupo ilegal [Paramilitares del MRN, principalmente], apreciada en un contexto histórico y social signado por la desaparición y muerte de ciudadanos pertenecientes a determinadas corrientes ideológicas, se constituye en un acto más de un conjunto de acciones idénticas que denotan la sistematicidad y generalidad del ataque, características de las graves violaciones a los derechos humanos"*<sup>51</sup>.

La mayoría de las acciones perpetradas por grupos paramilitares contra los miembros de la UP tuvieron como repertorio de violencia, principalmente, el uso del asesinato selectivo, el homicidio múltiple -masacre- y la desaparición forzada. A pesar de haber sido expuesto previamente, se reitera la existencia de un ejercicio de violencia letal con el objetivo de exterminar y no amedrentar a la Unión Patriótica. De tal modo, se plantea la configuración de una estrategia planeada de eliminación del movimiento a partir del uso sistemático del asesinato selectivo (3122 fallecidos), donde había una identificación concreta de la víctima y la acción violenta se ejecutaba en el marco de un plan establecido con anterioridad. Por otro lado, la implementación del homicidio individual y la desaparición forzada<sup>52</sup> frente al movimiento de la Unión Patriótica estuvo relacionada con un interés de minimización del calado e impacto del hecho victimizante que condujeron en múltiples casos a la banalización y el ocultamiento de los crímenes de la sociedad civil en general: *"la prevalencia de los asesinatos selectivos pone de presente una estrategia de violencia con una alta dosis de selectividad, porque se ataca en eventos individuales a personas específicas y porque multiplica los eventos con una alta frecuencia y un bajo perfil para difuminar la conexidad entre los hechos y ocultar las dimensiones y la escala de la violencia que se está perpetrando. Cuando se perpetran crímenes todos los días, pero con una, dos o tres víctimas, el mecanismo opaca las dimensiones, apuntala la impunidad y la negación, dificulta su investigación, reduce su notoriedad y minimiza o niega los hechos. Solo su agregación permite hacer visibles sus reales dimensiones"*<sup>53</sup>.

Es necesario plantear que los magnicidios y masacres sufridos por la UP estaban relacionados con la concreción y/o configuración de una estrategia de temor y violencia generalizada al interior de los miembros de la colectividad, que permitieron anular el ejercicio político a partir de una declaratoria directa de guerra y violencia sistemática: *"cuyo propósito era ejecutar frente a otros a las víctimas de la UP para masificar el mensaje de terror y su dimensión aleccionadora"*<sup>54</sup>. En cierto sentido, quien o quienes decidían continuar con la acción política en los territorios estaba sellando un acta de muerte.

<sup>48</sup> La Unión Patriótica fue tildada de ser el brazo político de la otrora guerrilla de las Farc-Ep por parte de mandos militares y miembros de sectores y élites políticas tradicionales: *"La UP fue señalada por el estamento militar como el enemigo interno a partir de una ideología anticomunista, lo que la convirtió en población objeto de una acción contrainsurgente. La propia doctrina contemplaba la disolución de la distinción entre civil y combatiente, militante desarmado y guerrillero y entre la UP y las FARC"* (CNMH. 2018. Todo pasó frente a nuestros ojos El genocidio de la Unión Patriótica 1984-2002. Bogotá. Pág. 202).

<sup>49</sup> CNMH. 2018. Todo pasó frente a nuestros ojos El genocidio de la Unión Patriótica 1984-2002. Bogotá. Págs. 150 – 152.

<sup>50</sup> Ibidem. Pág. 424.

<sup>51</sup> Ibidem. Pág. 425. Paréntesis Propio.

<sup>52</sup> Las dos prácticas de violencia suman aproximadamente el 78, 4% del universo de víctimas de la colectividad.

<sup>53</sup> CNMH. 2018. Todo pasó frente a nuestros ojos El genocidio de la Unión Patriótica 1984-2002. Bogotá. Pág. 156.

<sup>54</sup> Ibidem. Pág. 163.





Hoja número 10 de la Resolución No. 2018-93977 del 21 DE NOVIEMBRE DE 2018: "Por la cual se decide sobre la inscripción en el Registro Único de Víctimas, en virtud del Artículo 156 de la Ley 1448 de 2011 y el artículo 2.2.2.3.9 del Decreto 1084 de 2015".

De tal modo, la intención era configurar un escenario de inseguridad total que produjera el exilio, y/o amedrentamiento de quienes no habían sido víctimas de los ataques letales perpetrados de manera sistemática y/o generalizada.

Ahora bien, el magnicidio del candidato para las elecciones presidenciales de 1990, **BERNARDO ALFONSO JARAMILLO OSSA**, representó un hecho de amplio calado para el movimiento político de la Unión Patriótica asediado y perseguido por grupos armados que fueron auspiciados por sectores tradicionales que veían con desconfianza la apertura democrática y participación de nuevos actores en la escena democrática. El asesinato del líder patriótico sucedió en el marco del conjunto de acciones sistemáticas y generalizadas de victimización de la colectividad de la UP: *"el hecho mismo de que los dos candidatos presidenciales que tuvo el movimiento político en las elecciones sucesivas de 1986 y 1990 hayan sido asesinados resulta inédito en la historia para cualquier movimiento político, mucho más si se tiene en cuenta que fueron los dos primeros y únicos"*<sup>55</sup>. Luego del asesinato del regente de la colectividad patriótica, Jaime Pardo Leal, sucedido el día 11 de octubre de 1987, el abogado y Senador Bernardo Jaramillo Ossa asumió la dirección de la UP en el marco de un proceso de amenaza, asedio, eliminación y persecución del movimiento.

Bernardo nació el día 2 de septiembre de 1955 en la ciudad de Manizales en el seno de una familia obrera con tradición liberal y sindical heredada, principalmente, del abuelo Gustavo Jaramillo ferroviario adscrito al Ferrocarril de Caldas<sup>56</sup>. En sus primeros años de formación recibió tanto de su padre como abuelo un acercamiento a las ideas sociales de igualdad y justicia que se ahondaron con el paso de los años y el conocimiento de las ideas revolucionarias y el marxismo a partir de la participación y militancia de él y otro conjunto de jóvenes en la Juventud Comunista (JUCO) de Manizales y Caldas<sup>57</sup>. Con los años llegó a ser parte del Comité Central de la JUCO (1976), para luego ser designado parte de la Dirección Regional del Partido Comunista<sup>58</sup>. Su interés político y avivato locuaz y pertinente le permitieron surgir fervorosamente. De tal modo, Bernardo Jaramillo desde su juventud fue una persona carismática y de liderazgo, con sensibilidad social y muy cercano a las causas de los desprotegidos e ideas enarboladas por la izquierda. Entró a la Universidad de Caldas en el año 1974 donde estudio derecho desarrollando de modo paralelo la acción y dirigencia política desde la JUCO y el Partido Comunista Colombiano<sup>59</sup>. Sus estudios son concluidos en el año 1981 para luego partir a la región de Urabá, específicamente al municipio de Apartadó, como asesor del Sindicato de Trabajadores del Banano. Su trabajo como abogado y militante del Partido Comunista en el Urabá incidió de manera contundente en la configuración de las bases sociales que fortalecerían y aglutinarían posteriormente la UP, además de, establecer su figura como líder nato y dirigente nacional: *"Sí en Manizales transcurre el tiempo de su formación, Urabá es para Bernardo la época de maduración como hombre y como dirigente político. Allí levanta con otros compañeros una organización popular, con una presencia activa y recorre todo el camino de la dirección partidista"*<sup>60</sup>. Fue elegido representante en el año 1986 por el movimiento político de la Unión Patriótica a raíz de los votos recibidos de su trabajo de base y organizativo en la región de Urabá. A su vez, en el año 1987 es designado vicepresidente de la colectividad upeista, para luego el día 25 de octubre del mismo año ser designado como presidente del movimiento político en el marco del VI Pleno Unión Patriótica. Su papel en la dirección de la UP estuvo marcado por preocupaciones relacionadas con el "orden público" y la seguridad de los miembros y la supervivencia de la colectividad en el tiempo. De tal modo, no pudo establecer una regencia orientada en el ejercicio político y la lucha por la arena democrática del movimiento, sino tuvo que recalar en aquellos imperativos externos de inseguridad y falta de garantías para la actividad política: *"la Unión Patriótica nunca pudo dedicarse muellemente a la política"*<sup>61</sup>.

Durante los días 9 y 11 de septiembre de 1989 se llevó a cabo el II Congreso Nacional de la Unión Patriótica, con una amplia participación y afluencia de delegados bajo el lema *"país de todos, Gobierno de todos"*. En dicho escenario el senador **BERNARDO ALFONSO JARAMILLO OSSA** fue elegido el candidato presidencial por el partido y la figura llamada a generar la apertura que permitiese la convergencia y participación de los distintos sectores que componían el movimiento. Se propuso una transformación organizativa que incidiera en la ampliación de las bases a través de una convergencia

<sup>55</sup> Ibidem. Pág. 140.

<sup>56</sup> Vanegas, Napoleón. 1991. Bernardo Jaramillo Ossa: "Es un soplo la vida". Foro Nacional por Colombia. Págs. 31 – 35.

<sup>57</sup> Ibidem. Págs. 48 – 51.

<sup>58</sup> Ibidem. Pág. 52.

<sup>59</sup> Ibidem. Págs. 66 – 67.

<sup>60</sup> Ibidem. Pág. 80.

<sup>61</sup> Ibidem. Pág. 102.





Hoja número 11 de la Resolución No. 2018-93977 del 21 DE NOVIEMBRE DE 2018: "Por la cual se decide sobre la inscripción en el Registro Único de Víctimas, en virtud del Artículo 156 de la Ley 1448 de 2011 y el artículo 2.2.2.3.9 del Decreto 1084 de 2015".

pluralista que estuviera aislada tanto de los partidos tradicionales como de los grupos subversivos: *"Bernardo (...) desarroll[ar] una campaña de apelación al país, buscando la convergencia para el propósito nacional, para lograr una mayor apertura democrática y para encontrar solución a los más urgentes problemas nacionales"*<sup>62</sup>. El lema acogido en campaña fue *¡Veriga esa mano, País! Porque Colombia es un sueño de todos*, con el interés directo de atraer al conjunto de la sociedad colombiana y generar una integración nacional a partir de un proyecto común y solidario. Bernardo Jaramillo intentó buscar la convergencia de la izquierda, los movimientos de base sin voz y los sectores disidentes del tradicionalismo en un solo candidato que permitiese competir de una forma sólida frente a los partidos conservador y liberal en la contienda presidencial. Lamentablemente, el 22 de marzo de 1990 en el Puente Aéreo de Bogotá D.C., fue asesinado y confinada consigo su intención de convergencia e integración democrática.

Como se planteó previamente, el objetivo de quienes ejercieron violencia sobre el movimiento era el exterminio físico y político de éste. De tal modo, no se pretendía amedrentar sino silenciar permanentemente de la arena democrática a quienes se asociaban a la ideología upeísta. De tal modo, el exilio se presentó como una alternativa de salvaguarda y/o defensa de la vida, pero en concreto configuraba como una afectación similar a aquellas acciones letales (homicidios y desapariciones forzadas)<sup>63</sup> sufridas por el colectivo por la acción de los grupos armados, especialmente porque menguaba y/o anulaba del ejercicio político de quienes debían tomar dicha alternativa: *"El exilio no fue una decisión sencilla y quienes la tomaron, lo hicieron luego de sobrevivir a situaciones límite: atentados, hostigamientos o amenazas recurrentes contra ellos o sus familiares"*<sup>64</sup>. En cierto sentido, el exilio en el marco del conflicto corresponde a una situación límite donde quien se desplaza busca salvaguardar su vida y la de sus allegados a toda costa, del accionar de los grupos armados a pesar de la compleja y traumática experiencia que representa un cambio de tal índole: *"la inminencia del desenlace fatal de la violencia ejercida en su contra precipita la acción"*<sup>65</sup>. En el caso del movimiento político de la Unión Patriótica la sistematicidad y generalidad en la ocurrencia de asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, amenazas y/o atentados en contra de los miembros sucedidos a nivel nacional condujo a la configuración de una situación límite de amedrentamiento, desconfianza y miedo por falta de garantías y/o seguridad. Ante tal escenario el éxodo fuera de las fronteras nacionales -exilio- para los militantes de la UP *"pasó de ser una opción posible a la alternativa definitiva ante la inseguridad, incluso jurídica"*<sup>66</sup>. Teniendo en cuenta lo anterior, el exilio de gran número de militantes de la UP configuró, principalmente, dos consecuencias: una de tipo colectiva y otra individual y familiar. Frente a la primera, hubo una ruptura del tejido del movimiento y su accionar político a partir de la imposibilidad física de organización y participación política en espacio tiempo que repercutió en la minimización del impacto de la UP a nivel nacional. Por otro lado, el exilio incidió en un proceso de desarraigo y distanciamiento de múltiples individuos y familias que tuvieron que sufrir/vivir un proceso de adaptación/acomodamiento a paisajes extraños y en ocasiones hostiles producto de la persecución y asedio de grupos armados a un movimiento político<sup>67</sup>.

Para el presente caso correspondiente al HOMICIDIO del señor **BERNARDO ALFONSO JARAMILLO OSSA** en el marco de la violencia sistemática y generalizada que fue ejercida por parte de grupos armados sobre el movimiento político de la Unión Patriótica, se comprende el homicidio como una violación del derecho a la vida consagrado en la Constitución Política de Colombia. Para efectos de un instrumento internacional vigente y aplicable para Colombia, el Artículo 4, Numeral 1, de la Convención Americana establece que, *"Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente"*. Tal definición se complementa con el Comentario del Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, planteado por el Comité Internacional de la Cruz Roja-CICR, en el cual se señala que *"el homicidio comprende no sólo los casos de asesinato, sino también los de omisión intencional que puedan ocasionar la muerte"*. Adicionalmente, el Artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 expone que: *"se prohíbe, frente a las personas protegidas, los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas"*. A partir de lo último y las particularidades del caso, se trae a colación lo expuesto por EL ESPECTADOR, que permite establecer el fallecimiento del señor **BERNARDO ALFONSO JARAMILLO OSSA** sucedido

<sup>62</sup> Ibidem. Pág. 121. Paréntesis Propio

<sup>63</sup> CNMH. 2018. Todo pasó frente a nuestros ojos El genocidio de la Unión Patriótica 1984-2002. Bogotá. Pág. 381.

<sup>64</sup> Ibidem. Pág. 380.

<sup>65</sup> Ibidem. Pág. 381.

<sup>66</sup> Ibidem. Pág. 383.

<sup>67</sup> Ibidem. Págs. 386 – 390.





Hoja número 12 de la Resolución No. 2018-93977 del 21 DE NOVIEMBRE DE 2018: "Por la cual se decide sobre la inscripción en el Registro Único de Víctimas, en virtud del Artículo 156 de la Ley 1448 de 2011 y el artículo 2.2.2.3.9 del Decreto 1084 de 2015".

el día 22 de marzo de 1990 en el marco de la victimización colectiva sufrida por el movimiento de la UP por parte de grupos armados, principalmente, paramilitares<sup>66</sup>. En segundo término, las causales y/o motivantes de la muerte del señor **BERNARDO ALFONSO JARAMILLO OSSA** están relacionadas con la sistematicidad y generalidad de la violencia ejercida en contra del movimiento de la Unión Patriótica. Es de resaltar que la obligación de la institucionalidad de defender y respetar de los derechos humanos, especialmente, el derecho a la vida de los militantes de la Unión Patriótica presentó amplios vicios que incidieron en la permisibilidad de las acciones victimizantes sobre el colectivo. De tal modo es posible establecer una omisión previsible que condujo a un aumento considerable de víctimas fatales durante el primer periodo de existencia con personería jurídica de la UP.

Ahora bien, el Estatuto de Roma en su Artículo 8, numeral 2e, viii, establece que para que se configure el hecho victimizante de HOMICIDIO en el marco del conflicto armado deben suceder las siguientes condiciones: "Que esa persona o personas hayan estado fuera de combate o hayan sido personas civiles o miembros del personal sanitario o religioso que no tomaban parte activa en las hostilidades (...) Que el autor haya sido consciente de las circunstancias de hecho que establecían esa condición. (...) Que la conducta haya tenido lugar en el contexto de un conflicto armado que no era de índole internacional y haya estado relacionada con él (...) Que el autor haya sido consciente de circunstancias de hecho que establecían la existencia de un conflicto armado". Frente a los elementos de configuración del hecho victimizante es necesario plantear que el señor **BERNARDO ALFONSO JARAMILLO OSSA** para el momento de los hechos era presidente de la Unión Patriótica y candidato presidencial por dicha colectividad para las elecciones del noventa; es decir, su condición era de persona protegida en el marco del derecho internacional humanitario. Por otro lado, el HOMICIDIO sucede en el marco de la sucesión de múltiples asesinatos selectivos, masacres y desapariciones forzadas de miembros del movimiento político de la UP. Dichas afectaciones fueron cometidas en razón de la estigmatización de subversiva del movimiento de la UP, junto con, aquellas personas declaradas de tendencia de izquierda y/o marxista por grupos armados, principalmente paramilitares, en el marco del conflicto. De tal modo es posible establecer la configuración del hecho victimizante de HOMICIDIO del señor **BERNARDO ALFONSO JARAMILLO OSSA** en el marco de la Ley 1448 de 2011.

Con relación a los dos eventos victimizantes de AMENAZA es posible concluir que la señora **MARIELA DEL SOCORRO BARRAGAN BELTRAN**, junto con, el señor **BERNARDO ALFONSO JARAMILLO OSSA** se vieron involucrados en una situación provocada por un grupo armado al margen de la ley que afectó su dignidad personal, así como la tranquilidad para continuar el desarrollo de su libre personalidad y de sus labores cotidianas; condiciones que se configuran y se reconocen para este hecho victimizante, al ser una práctica prohibida tal como lo indica el artículo 4, numeral 2, h) del Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra "(...) quedarán prohibidas en todo tiempo y lugar (...) Las amenazas de realizar los actos mencionados (...) y en el artículo 13, numeral 2 del Protocolo referido "(...) no serán objeto de ataque la población civil como tal ni las personas civiles. Quedan prohibidos los actos de amenaza de violencia (...)". Lo anterior, permite establecer la configuración de los dos eventos victimizantes de AMENAZA sucedidos los días 02 de febrero de 1989 y 01 de septiembre de 1989.

Para el presente caso como parte de las herramientas técnicas han sido consultadas el día 21 de noviembre de 2018, todas las personas relacionadas en la presente resolución, en las bases de datos de la Procuraduría General de la Nación y la Policía Nacional de Colombia. Asimismo, en la Red Nacional de Información se realizó la consulta en: el Sistema de Información de Reparación Administrativa (SIRA) Decreto 1290 de 2008; en el Sistema de Información Víctimas de la Violencia (SIV) Ley 418 de 1997; en el Registro Único de Víctimas (RUV) Ley 1448 de 2011 y; en el Registro Único de Población Desplazada (RUPD) Ley 387 de 1997 y la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), encontrando que ninguno de los relacionados en la declaración cuentan con información que desvirtúe lo(s) hecho(s) victimizante(s) analizado(s) en la presente resolución.

Tomando en consideración la síntesis legal, el contenido histórico y técnico consultado, así como lo expuesto en los presupuestos jurídicos referidos, se concluyó que resulta pertinente reconocer a la señora **MARIELA DEL SOCORRO BARRAGAN BELTRAN**, el hecho victimizante de HOMICIDIO del señor **BERNARDO ALFONSO JARAMILLO OSSA**, en el Registro Único de Víctimas (RUV). Asimismo, se concluyó que resulta pertinente reconocer a la señora **MARIELA DEL SOCORRO BARRAGAN**

<sup>66</sup> "la organización de los hermanos Fidel, Vicente y Carlos Castaño, la que concretó la acción en el aeropuerto El dorado". (EL ESPECTADOR. "El magnicidio de Bernardo Jaramillo". 10 de octubre de 2012. Disponible en: <https://www.elespectador.com/noticias/el-magnicidio-de-bernardo-jaramillo-articulo-380381>.)





Hoja número 13 de la Resolución No. 2018-93977 del 21 DE NOVIEMBRE DE 2018: "Por la cual se decide sobre la inscripción en el Registro Único de Víctimas, en virtud del Artículo 156 de la Ley 1448 de 2011 y el artículo 2.2.2.3.9 del Decreto 1084 de 2015".

**BELTRAN**, junto con su grupo familiar, los dos eventos victimizantes de AMENAZA sucedidos los días 02 de febrero de 1989 y 01 de septiembre de 1989, en el Registro Único de Víctimas (RUV).

En consecuencia, analizados los elementos encontrados respecto de la verificación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar referidas en la declaración, se concluyó que los dos eventos victimizantes de AMENAZA sucedidos los días 02 de febrero de 1989 y 01 de septiembre de 1989, declarado(s) por el (la) deponente se enmarca(n) dentro de las disposiciones establecidas en el artículo 3 de la Ley 1448 de 2011, por lo cual es viable jurídicamente incluir a la señora **MARIELA DEL SOCORRO BARRAGAN BELTRAN**, junto con su grupo familiar, en el Registro Único de Víctimas –RUV; asimismo, se concluyó que el hecho victimizante de HOMICIDIO del señor **BERNARDO ALFONSO JARAMILLO OSSA**, declarado(s) por el (la) deponente se enmarca(n) dentro de las disposiciones establecidas en el artículo 3 de la Ley 1448 de 2011, por lo cual es viable jurídicamente incluir a la señora **MARIELA DEL SOCORRO BARRAGAN BELTRAN**, en el Registro Único de Víctimas –RUV

Por otra parte, en cuanto a la victimización del evento de Desplazamiento Forzado del día 18 de marzo de 1989, es de resaltar que tanto el candidato presidencial **BERNARDO ALFONSO JARAMILLO OSSA** como la señora **MARIELA DEL SOCORRO BARRAGAN BELTRAN**, tuvieron que exilarse del país, durante el año 1989, como mecanismo de salvaguarda sus vidas, a raíz de las constantes amenazas en contra de la integridad de los miembros, especialmente de quienes ejercían algún rol y/o liderazgo representativo al interior del movimiento, como era el caso de estos. A pesar del desenlace trágico en cabeza de **BERNARDO ALFONSO JARAMILLO OSSA** expuesto previamente En general, el carácter sistemático y generalizado de la violencia política ejercida en contra de la UP produjo el traslado de un gran número de miembros de la colectividad a distintas zonas. Tales movilizaciones incidieron en una modificación del ejercicio político, el lugar de residencia y militancia y las condiciones de vida de muchos que repercutieron en la capacidad e incidencia organizativa y política de la Unión Patriótica.

En este orden de ideas, la Unidad para las Víctimas no desconoce que el grupo familiar tuvo que trasladarse fuera de las fronteras del territorio nacional, atendiendo a un riesgo inminente; Sin embargo, al revisar con detenimiento el marco normativo vigente a saber, la Ley 1448 de 2011, en el Artículo 60, Parágrafo 2, señala que: "(...) Para los efectos de la presente ley, se entenderá que es víctima del desplazamiento forzado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional, abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de las violaciones a las que se refiere el artículo 3° de la presente ley (...)"

En este sentido, sin desconocer los criterios que en relación con el concepto de "desplazados internos" han sido expuestos por las organizaciones nacionales e internacionales que se ocupan del tema, de conformidad con lo preceptuado en la ley y la jurisprudencia constitucional, puede afirmarse que se encuentra en condición de desplazado toda persona que se ve obligada a abandonar intempestivamente su lugar de residencia y sus actividades económicas habituales, debiendo al traslado a otro lugar, dentro de las fronteras del territorio nacional, por causas aplicables a la existencia de una amenaza a su integridad personal.

Por consiguiente, se concluye que si bien la señora **MARIELA DEL SOCORRO BARRAGAN BELTRAN** hace referencia al desplazamiento ocurrido desde el territorio nacional hacia la ciudad de Berlín (Alemania), en estricto no podría ser reconocido, bajo el marco normativo citado con anterioridad ya que no cumple con los parámetros establecidos en la ley 1448 de 2011.

Finalmente, es necesario informarle que, si usted considera que ha sido víctima de algún otro hecho diferente a los mencionados en su declaración, podrá presentar declaración por estos hechos, conforme a lo señalado en el artículo 155 de la ley 1448 de 2011 y el artículo 2.2.2.3.1. del Decreto 1084 de 2015.



GOBIERNO  
DE COLOMBIA



UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS

Hoja número 14 de la Resolución No. 2018-93977 del 21 DE NOVIEMBRE DE 2018: "Por la cual se decide sobre la inscripción en el Registro Único de Víctimas, en virtud del Artículo 156 de la Ley 1448 de 2011 y el artículo 2.2.2.3.9 del Decreto 1084 de 2015".

En mérito de lo expuesto, esta Dirección,

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** INCLUIR a la señora **MARIELA DEL SOCORRO BARRAGAN BELTRAN** identificada con cédula de ciudadanía No. 32621441, en el Registro Único de Víctimas (RUV), el hecho victimizante de **HOMICIDIO** del señor **BERNARDO ALFONSO JARAMILLO OSSA**, quien en vida se identificaba con cédula de ciudadanía No. 10236946. Asimismo, RECONOCER a la señora **MARIELA DEL SOCORRO BARRAGAN BELTRAN**, junto con el señor **BERNARDO ALFONSO JARAMILLO OSSA** los dos eventos victimizantes de **AMENAZA** sucedidos los días 02 de febrero de 1989 y 01 de septiembre de 1989, atendiendo a la parte motiva de la presente resolución.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** NO RECONOCER a la señora **MARIELA DEL SOCORRO BARRAGAN BELTRAN** identificada con cédula de ciudadanía No. 32621441, junto con su grupo familiar, en el Registro Único de Víctimas (RUV) el hecho victimizante de **DESPLAZAMIENTO FORZADO**, atendiendo a la parte motiva de la presente resolución.

**ARTÍCULO TERCERO:** ANEXAR la ruta establecida para que las víctimas accedan al conjunto de medidas adoptadas en su beneficio, que posibilitarán hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral con garantía de no repetición, las cuales contribuirán a dignificar su condición a través de la materialización de sus derechos constitucionales.

**ARTÍCULO CUARTO:** NOTIFICAR el contenido de este acto administrativo, de conformidad con lo previsto en los artículos 66 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011 a la señora **MARIELA DEL SOCORRO BARRAGAN BELTRAN**.

**ARTÍCULO QUINTO:** COMUNICAR el contenido de este acto administrativo **PUNTO DE ATENCIÓN TERMINAL DE TRANSPORTES EL SALITRE** de la ciudad de **BOGOTÁ D.C.** Contra la decisión que concede el registro, proceden los recursos de reposición ante el funcionario que tomó la decisión y en subsidio el de apelación ante el director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas de que trata la presente ley, dentro de los diez (10) días siguientes contados a partir de su comunicación. Lo anterior, de conformidad con el Artículo 76 de la Ley 1437 de 2011.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Bogotá, a los 21 días del mes de noviembre de 2018

GLADYS CELEIDE PRADA PARDO

DIRECTORA TÉCNICA DE REGISTRO Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN  
DE LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS





REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CALDAS

NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCULO

PALACIO NACIONAL PISO PRINCIPAL - CALLE 22 No. 23-58 - ESQ. CRA: 24  
TELEFONOS 351-69 - 218-26 - MANIZALES

=SEGUNDA= COPIA DE LA ESCRITURA No. =1.654=

DE 02 DE NOVIEMBRE DE 1983

TITULO LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL

OTORGANTES ANA LUCIA ZAPATA DE JARAMILLO y BERNARDO ALFONSO JARAMILLO OSSA.-

EL NOTARIO 2o.

ALBERTO MARIN CORREA  
ABOGADO TITULADO







REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CALDAS

# NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCULO

PALACIO NACIONAL PISO PRINCIPAL - CALLE 22 No. 23-58 - ESQ. CRA: 24  
TELEFONOS 351-69 - 218-26 - MANIZALES

=SEGUNDA= COPIA DE LA ESCRITURA No. =1.654=

DE 02 DE NOVIEMBRE DE 1983

TITULO LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL

OTORGANTES "ANA LUCIA ZAPATA DE JARAMILLO y BERNARDO ALFONSO JARAMILLO OSSA".-

EL NOTARIO 2o.





40

bitación situada en el área rural de ésta ciudad, de ficha catastral 01-3-334-038 ubicada en el barrio el SOL en la calle 49 #-21.20 casa 64 con una área de 155 metros cuadrados, avaluada catastralmente en la suma de \$ CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL PESOS- (\$ 195.000.00) Moneda Corriente . SEXTO: Que el pasivo de la - sociedad conyugal está representado en la deuda que por concepto de financiación para compra del inmueble descrito en el numeral anterior tiene ANA LUCIA ZAPATA DE JARAMILLO con el BANCO CENTRAL HIPOTECARIO por la suma de TRESCIENTOS TREINTA MIL PESOS - (\$ 330.000.00), la cual quedará a cargo de la mencionada ANA LUCIA ZAPATA DE JARAMILLO exclusivamente. SEPTIMO: La presente separación surte sus efectos a partir del presente acuerdo y de acá en adelante lo adquirido por cada uno de los cónyuges ingresará exclusivamente a su respectivo patrimonio. OCTAVO: La mantención de los hijos comunes PAULA TATIANA y BERNARDO JARAMILLO ZAPATA continuará estando a cargo de ambos cónyuges de conformidad con las normas legales sobre la materia. (Otergada conforme a minuta presentada a la Notaría) Se agregan los comprobantes de ley. Se advirtió a los otorgantes la obligación del registro oportuno y - firman ante mi de todo lo cual doy fé: . Los comparecientes presentaron Paz y salvos Nacionales números 0656309 y 0656308 expedidos el día 2 de Noviembre de 1983 y válido hasta el día 31 de Diciembre de 1983. Paz y salvo Municipal Nro. 023465 expedido el día 26 de Octubre de 1983 y válido hasta el 31 de Diciembre de - 1983 . Avaluo Catastral \$ CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL PESOS \$(195.000.00) M/CTE. Este instrumento se corrió en las hojas de papo sellado Nro. AF- 07904705-07904706. Derecho. Decreto ley, 1772 de 1979.

*Bernardo Jaramillo Rios*  
BERNARDO JARAMILLO RIOS

cc# 1202030 Nels

L,M # 304263. D. Nels







AF 07904705

NUMERO: MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO (1654)

En la cabecera del círculo de Manizales, capital del Departamento de Caldas, República de Colombia a, Dos (2) días del mes de Noviembre de Mil Novecientos Ochenta y tres (1983) ante mi, ALBERTO MARIN CORREA, Notario Segundo del

círculo de Manizales, comparecieron: ANA LUCIA ZAPATA DE JARAMILLO mayor de edad, y vecina de ésta ciudad, con cédula de ciudadanía número 24.410.531 de Apía y el señor BERNARDO JARAMILLO RIOS, también mayor y de ésta vecindad, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.202.030 de Manizales, a quienes conozco personalmente de lo cual doy fé y dijeron: PRIMERO: Que BERNARDO JARAMILLO RIOS actúa en representación del señor BERNARDO ALFONSO JARAMILLO OSSA, quien es mayor de edad y vecino de Apartadó y le ha conferido poder especial para que en su nombre suscriba los respectivos documentos de separación de bienes con la señora ANA LUCIA ZAPATA DE JARAMILLO. El señor BERNARDO JARAMILLO RIOS presenta el poder otorgado por BERNARDO ALFONSO JARAMILLO OSSA. SEGUNDO: Que los señores BERNARDO ALFONSO JARAMILLO OSSA y ANA LUCIA ZAPATA contrajeron matrimonio por los ritos católicos el día 29 de Abril de 1977 en la Parroquia San Martín de Porres de Manizales, habiendo sido registrado dicho matrimonio en la Notaría Segunda del círculo de Manizales. TERCERO: Que es voluntad de los cónyuges disolver y liquidar de común acuerdo la sociedad conyugal que forman en virtud de dicho matrimonio, separándose de bienes por medio de la presente escritura. CUARTO: El activo de la sociedad conyugal está compuesto por la casa de habitación ubicada en el área urbana de ésta ciudad que figura a nombre de Ana Lucia Zapata de Jaramillo, por un televisor a color marca CHIMAZU, de catorce pulgadas. QUINTO: Que dicho activo se distribuirá así: El mencionado televisor a color marca Chimazu pasa a ser de propiedad exclusiva de la cónyuge ANA LUCIA ZAPATA DE JARAMILLO, al igual que la casa de ha-





Apartadó, Octubre 5/83

SEÑOR

BERNARDO ALFONSO JARAMILLO OSSA, mayor de edad, vecino de Apartadó (Ant), identificado con C.C # 10.236.946 de Manizales; comedidamente me dirijo a usted con el fin de manifestarle que por medio del presente escrito confiero PODER al señor BERNARDO JARAMILLO RIOS, mayor de edad, vecino de Manizales y identificado con C.C # 1202030 de Manizales, para que en mi nombre y representación suscriba todos los documentos, de separación de bienes entre el suscrito y la Sra. ANA LUCIA ZAPATA de JARAMILLO.

Mi apoderado queda facultado para realizar las gestiones necesarias encaminadas al buen cumplimiento del presente poder.

Atentamente,

*[Handwritten signature]*  
BERNARDO ALFONSO JARAMILLO OSSA  
C.C # 10.236.946 de Manizales.



*[Handwritten notes and signatures]*  
DOCUMENTO  
De Bernardo Jaramillo Ossa  
y Rigdo 946 de Manizales  
de 1983  
Los Firmes, en la presencia de  
Comparendo Público  
Aprobado, 6 de  
de 1983  
El Secretario

república de



44



*Ana Lucía Zapata de Jaramillo*

ANA LUCIA ZAPATA DE JARAMILLO

cc# 24410531 Apia (R)

ALBERTO MARIN CORREA

Notario Segundo

Es segunda y fiel copia mecánica tomada de su original que se expide con destino al -

interesado: "BERNARDO ALFONSO JARAMILLO O-

MANIZALES NOVIEMBRE 7 de 1.983.

ALBERTO MARIN CORREA

Notario Segundo

TEL. 21826

REPUBLICA DE COLOMBIA  
NOTARIO VEINTISIETE DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C.  
DILIGENCIA DE AUTENTICACION  
El suscrito Notario 27 ENCARGADO del Circulo de Bogota D.C. certifica que esta FOTOCOPIA coincide con su FOTOCOPIA AUTENTICA que he tenido a la vista.  
01 JUN 2018  
Encargado  
BOGOTA D.C.  
NOTARIO VEINTISIETE

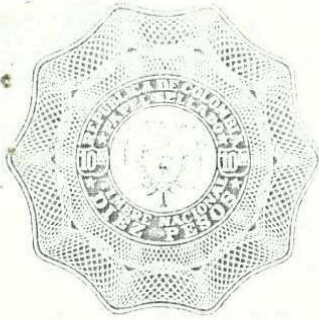






.43





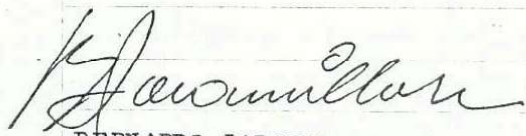
NUMERO: MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO (1654)

En la cabecera del círculo de Manizales, capital del Departamento de Caldas, República de Colombia a, Dos (2) días del mes de Noviembre de Mil Novecientos Ochenta y tres (1983) ante mi, ALBERTO MARIN CORREA, Notario Segundo del

círculo de Manizales, comparecieron: ANA LUCIA ZAPATA DE JARAMILLO mayor de edad, y vecina de ésta ciudad, con cédula de ciudadanía número 24.410.531 de Apía y el señor BERNARDO JARAMILLO RIOS, también mayor y de ésta vecindad, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.202.030 de Manizales, a quienes conozco personalmente de lo cual doy fé y dijeron: PRIMERO: Que BERNARDO JARAMILLO RIOS actúa en representación del señor BERNARDO ALFONSO JARAMILLO OSSA, quien es mayor de edad y vecino de Apartadó y le ha conferido poder especial para que en su nombre suscriba los respectivos documentos de separación de bienes con la señora ANA LUCIA ZAPATA DE JARAMILLO. El señor BERNARDO JARAMILLO RIOS presenta el poder otorgado por BERNARDO ALFONSO JARAMILLO OSSA. SEGUNDO; Que los señores BERNARDO ALFONSO JARAMILLO OSSA y ANA LUCIA ZAPATA contrajeron matrimonio por los ritos católicos el día 29 de Abril de 1977 en la Parroquia San Martín de Porres de Manizales, habiendo sido registrado dicho matrimonio en la Notaría Segunda del círculo de Manizales. TERCERO:.- Que es voluntad de los cónyuges disolver y liquidar de común acuerdo la sociedad cónyugal que forman en virtud de dicho matrimonio, separándose de bienes por medio de la presente escritura. CUARTO: El activo de la sociedad cónyugal está compuesto por la casa de habitación ubicada en el área urbana de ésta ciudad que figura a nombre de Ana Lucia Zapata de Jaramillo, por un televisor a color marca CHIMAZU, de catorce pulgadas. QUINTO:.- Que dicho activo se distribuirá así: El mencionado televisor a color marca Chimazu pasa a ser de propiedad exclusiva de la cónyuge ANA LUCIA ZAPATA DE JARAMILLO, al igual que la casa de ha-



bitación situada en el área rural de ésta ciudad, de ficha catastral 01-3-334-038 ubicada en el barrio el SOL en la calle 49 #-21.20 casa 64 con una área de 155 metros cuadrados, avaluada catastralmente en la suma de \$ CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL PESOS- (\$ 195.000.00) Moneda Corriente . SEXTO: Que el pasivo de la - sociedad cónyugal está representado en la deuda que por concepto de financiación para compra del inmueble descrito en el numeral anterior tiene ANA LUCIA ZAPATA DE JARAMILLO con el BANCO CENTRAL HIPOTECARIO por la suma de TRESCIENTOS TREINTA MIL PESOS - (\$ 330.000.00), la cual quedará a cargo de la mencionada ANA LUCIA ZAPATA DE JARAMILLO exclusivamente. SEPTIMO: La presente separación surte sus efectos a partir del presente acuerdo y de acá en adelante lo adquirido por cada uno de los cónyuges ingresará exclusivamente a su respectivo patrimonio. OCTAVO: La mantención de los hijos comunes PAULA TATIANA y BERNARDO JARAMILLO ZAPATA continuará estando a cargo de ambos cónyuges de conformidad con las normas legales sobre la materia. (Otergada conforme a minuta presentada a la Notaría) Se agregan los comprobantes de ley. Se advirtió a los otorgantes la obligación del registro oportuno y - firman ante mi de todo lo cual doy fé: . Los comparecientes presentaron Paz y salvos Nacionales números 0656309 y 0656308 expedidos el día 2 de Noviembre de 1983 y válido hasta el día 31- de Diciembre de 1983. Paz y salvo Municipal Nro. 023465 expedido el día 26 de Octubre de 1983 y válido hasta el 31 de Diciembre de - 1983 . Avaluo Catastral \$ CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL PESOS \$(195.000.00) M/CTE. Este instrumento se corrió en las hojas de papel- sellado Nro. AF- 07904705-07904706. Derecho. Decreto ley. 1772 de 1979.



BERNARDO JARAMILLO RIOS

cc# 1202030 MZLS

L.M #304263. D. MZLS

n

Apartadó, Octubre 5/83

SEÑOR

BERNARDO ALFONSO JARAMILLO OSSA, mayor de edad, vecino de Apartadó (Ant), identificado con C.C # 10.236.946 de Manizales; comedidamente me dirijo a usted con el fin de manifestarle que por medio del presente escrito confiero PODER al señor BERNARDO JARAMILLO RIOS, mayor de edad, vecino de Manizales y identificado con C.C # 1202030 de Manizales, para que en mi nombre y representación suscriba todos los documentos, de separación de bienes entre el suscrito y la Sra. ANA LUCIA ZAPATA de JARAMILLO.

Mi apoderado queda facultado para realizar las gestiones necesarias encaminadas al buen cumplimiento del presente poder.

Atentamente,

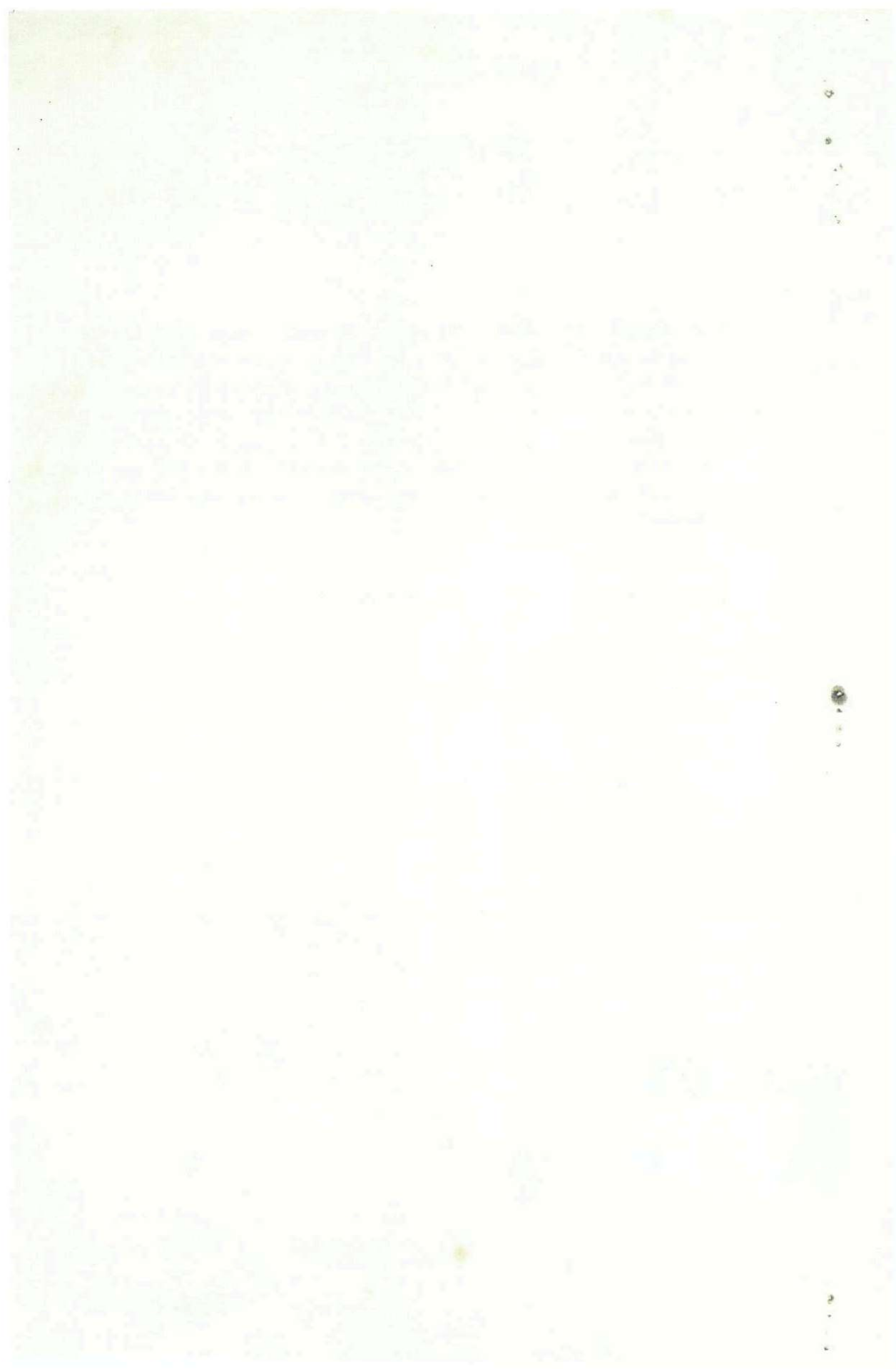
BERNARDO ALFONSO JARAMILLO OSSA  
C.C # 10.236.946 de Manizales.



APARTADO  
Documento  
De Bernardo Jaramillo Ossa  
y de Ana Lucia Zapata  
de 1983  
E. Rios  
de 1983

República de







*Ana Lucia Zapata de Jaramillo*

ANA LUCIA ZAPATA DE JARAMILLO

cc# 24410531 Apia (R)

ALBERTO MARIN CORREA

Notario Segundo

Es segunda y fiel copia mecánica tomada de

su original que se expide con destino al -

interesado: "BERNARDO ALFONSO JARAMILLO O-

MANIZALES NOVIEMBRE 7 de 1.983.



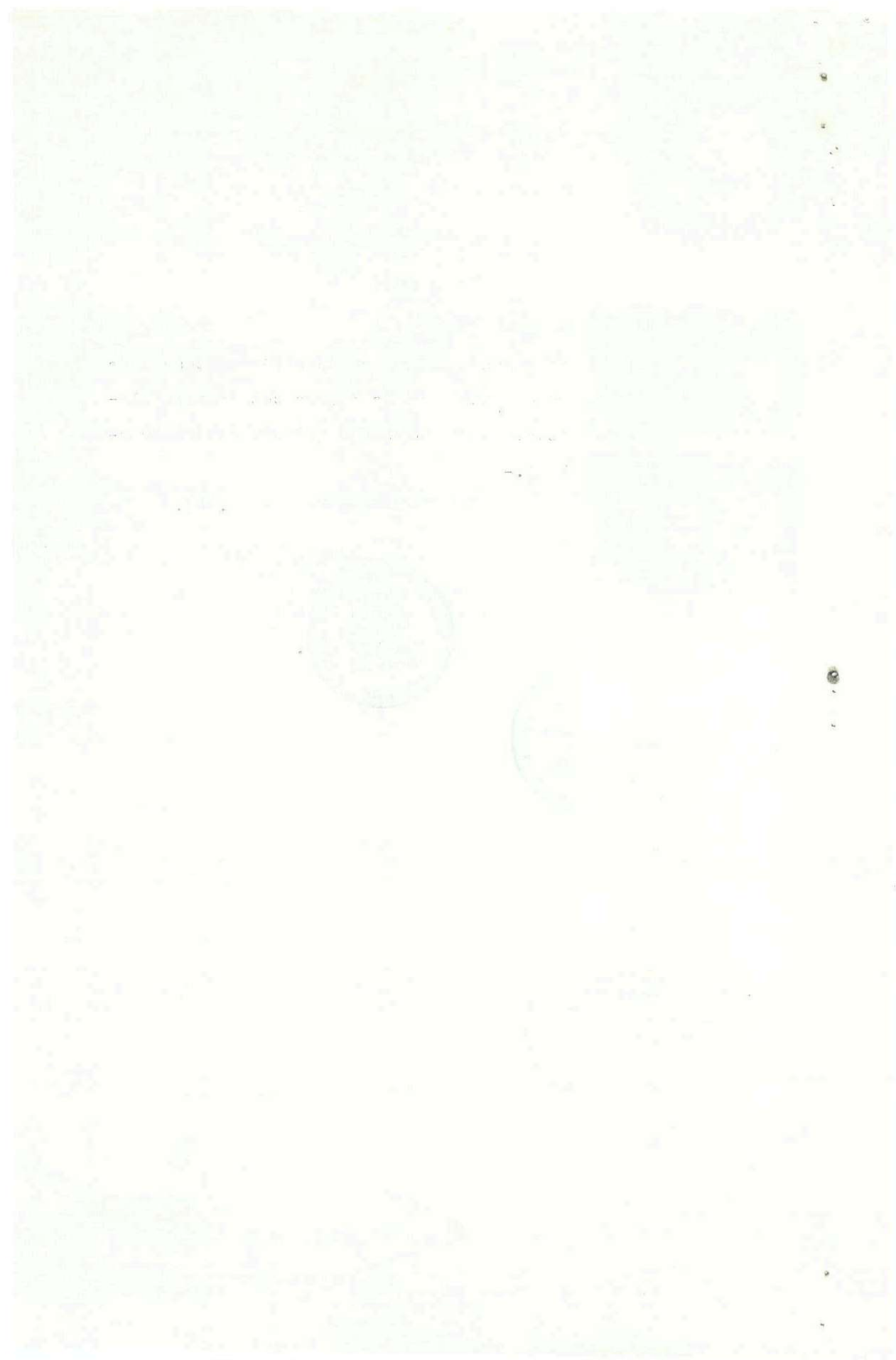
ALBERTO MARIN CORREA

Notario Segundo

Calle 22 No 23-58

TEL. 21826







REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CALDAS

NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCULO

PALACIO NACIONAL PISO PRINCIPAL - CALLE 22 No. 23-58 - ESQ. CRA: 24

TELEFONOS 351-69 - 218-26 - MANIZALES

COPIA DE LA ESCRITURA No. \_\_\_\_\_

DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE 1.9 \_\_\_\_\_

TITULO \_\_\_\_\_

OTORGANTES \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

EL NOTARIO 2o.

ALBERTO MARIN CORREA  
ABOGADO TITULADO





REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA  
**32621441**

NUMERO

**BARRAGAN BELTRAN**

APELLIDOS

**MARIELA DEL SOCORRO**

NOMBRES

*Mariela Beltrán*

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO

**03-ABR-1957**

**BARRANQUILLA**  
(ATLANTICO)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.65**

**A+**

**F**

ESTATURA

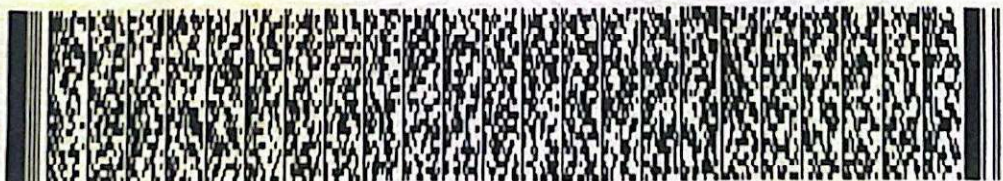
G.S. RH

SEXO

**09-AGO-1977 BARRANQUILLA**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Ivan Duque Escobar*  
REGISTRADOR NACIONAL  
IVAN DUQUE ESCOBAR



A-1500130-70102399-F-0032621441-20020311

00739 02070H 01 130109534